

¿Por qué asesinaron al general?

No nos pongan obstáculos. Lo peor sería que fracasáramos no porque no seamos capaces, sino porque se pongan obstáculos artificiales en nuestro camino. Si eso sucediera, al pueblo latinoamericano no le quedaría otra alternativa que la violencia. Si eso sucediera —y no es que yo lo desee— llegará el día en que ningún norteamericano pueda poner los pies en Sudamérica sin correr peligro. Esta es la gran responsabilidad política que tienen los EE.UU.

*Salvador Allende, entrevista
con «TIME», 19 de abril
de 1971.*

Entre el 4 de septiembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende y la combinación de partidos políticos de izquierda que lo apoyaban tuvieron que afrontar siete intentos de insurrección militar contra la Administración civil.

Los siete intentos insurreccionales contaron con el apoyo de agencias gubernamentales y empresas privadas gigantes de los Estados Unidos, y por supuesto, con la participación de las organizaciones empresariales monopólicas de la industria, el comercio, la banca y la agricultura de Chile.

Sin embargo, no fue hasta el último trimestre de 1972 cuando todos esos sectores que empujaron, desde el primer día de la elección, para derribarlo, que se pusieron de acuerdo en un plan bien coordinado, con tiempo de realización prudente y, podría decirse, científicamente determinado.

La historia de los siete intentos militares por sublevarse, también es la historia de una pugna, en Washington, entre el poder militar y el poder civil norteamericano. Para mi país, esto se expresó en la pugna entre el Pentágono, de enorme influencia

en las tres ramas de las Fuerzas Armadas chilenas, y la Agencia Central de Inteligencia, ligada estrechamente a las directivas de la Democracia Cristiana y Nacional, y a los sectores más reaccionarios de las organizaciones empresariales Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad Nacional de Agricultura y Confederación Nacional de la Producción y el Comercio.

La historia de los siete intentos de insurrección militar es, también, la historia del imperialismo norteamericano y la oligarquía chilena en una etapa desesperada de su existencia en Chile, cuando, al final de la administración democratacristiana de Eduardo Frei, veían venirse encima de sus intereses una oleada temible de luchas populares, que habían roto el engaño de la «revolución en libertad», prometida por la Democracia Cristiana en 1964, y buscaban una salida propia a la profunda crisis económica que azotaba el país en 1970.

Estos dos sectores dominantes de la sociedad chilena, vieron en Salvador Allende, su programa y su combinación política, dos cosas contradictorias: una terrible amenaza para su dominio y una posibilidad de escamotear a los trabajadores chilenos su deseo de expulsar el poderío imperial de Estados Unidos y derrocar el poder de la oligarquía. Y esto último precisamente, utilizando a Allende como «dique de contención» de las ansias de centenares de miles de trabajadores chilenos por destruir el viejo sistema social de su país, y construir otro en que ellos fueran no sólo los protagonistas, sino también los objetos de todos los beneficios del nuevo sistema social.

Durante sus tres años de gobierno, Salvador Allende utilizó esa doble perspectiva en que lo veían sus enemigos políticos para desarmar conspiraciones, resolver crisis políticas y continuar al frente de la nación. Sólo cuando el Pentágono y la CIA, las empresas multinacionales y la oligarquía chilena se pusieron de acuerdo en una sola óptica sobre Allende, éste quedó condenado irremediabilmente al destino que quisieran darle los militares insurrectos. Y esa óptica única fue la siguiente: Salvador Allende ya no servía como «dique de contención». Igual que Frei en 1970, a Allende en 1973 le había fracasado el esquema de su programa. A Frei, sus reformas» no le sirvieron para ocultar a los ojos de las masas que estaba protegiendo a los grandes empresarios monopólicos chilenos y norteamericanos, y la presión combativa de los trabajadores le obligó a desatar una represión muy fuerte sobre obreros, campesinos, empleados y estudiantes.

A Allende, su programa de desarrollo profundo del capitalismo de Estado, lesionando intereses de sectores empresariales norteamericanos y de una buena parte de la oligarquía chilena, no le abrió el «camino pacífico» hacia ninguna parte. Por el contrario, fue el detonante para que centenares de miles de obreros, campesinos, empleados y estudiantes se organizaran por su cuenta, al margen de Allende y su combinación política, para «seguir adelante» en la lucha por destruir el poder económico, político y social del imperialismo norteamericano y la oligarquía chilena. En 1973, el «dique de contención» empezaba a saltar hecho trizas por la fuerza de las masas. Entonces, sus enemigos se pusieron de acuerdo: no bastaba reemplazar a Allende; había que reemplazar el sistema de sujeción de todo el pueblo chileno al carro de quienes han vivido de su sudor y de su trabajo por siglos. Enterraron la democracia y la reemplazaron con el desempolvado cadáver del fascismo. Y en el derrumbe de la democracia chilena, fue aplastado no solamente Salvador Allende, sino también decenas de miles de chilenos.

Para hacer este trabajo, el imperialismo norteamericano y la oligarquía chilena pusieron en marcha al pilar fundamental del Estado que habían creado en Chile las Fuerzas Armadas. De esa «puesta en marcha», habla la historia de estos siete intentos de insurrección militar. Su orden temporal es éste: 1) Septiembre-octubre de 1970; 2) marzo de 1972; 3) septiembre de 1972; 4) junio de 1973; 5) agosto de 1973; 6) siete de septiembre de 1973; y 7) el 11 de septiembre de 1973. Vamos a examinarlos en detalle.¹

El caso Schneider

Era el jueves 22 de octubre de 1970. Desde la noche del 4 de septiembre del mismo año, cuando el recuento de los votos en las elecciones presidenciales señalaron el triunfo, por un escaso margen de 30.000 electores en tres millones de votos emitidos entre tres candidatos, para Salvador Allende, candidato de una agrupación de partidos de izquierda, el país se había estremecido con los efectos de diversos intentos por impedir que Allende se hiciera cargo de la presidencia de la República.

Ese jueves 22 de octubre ocurrió un hecho que, trágicamente para los partidos políticos de la Unidad Popular, fue calificado por sus dirigentes como «la señal» de que las Fuerzas Armadas

chilenas eran «una institución única en América Latina» que no tenían influencia «del imperialismo norteamericano ni de la oligarquía chilena» y que por eso mismo, «no constituían un factor de peligro» para el proceso de transformaciones socioeconómicas que suponía el programa de la Unidad Popular. Este error de información de lo que realmente ocurrió en el seno de las Fuerzas Armadas chilenas entre el 4 de septiembre y 22 de octubre de 1970, fue el punto de partida desde el cual Salvador Allende fue acumulando equivocación tras equivocación en su política respecto a las Fuerzas Armadas, concediéndoles, de hecho, todas las facilidades para que concretaran su sangriento asalto a la Administración civil el 11 de septiembre de 1973.

Volvamos al jueves 22 de octubre de 1970. Y hagámoslo en el lenguaje del parte policial del mayor Carlos Donoso Pérez, a cargo de la Vigésimo cuarta Comisaría de Carabineros de Las Condes (barrio oriente de Santiago).

«A las 8.20 horas, más o menos, en circunstancias que el señor comandante en jefe del Ejército, general René Schneider Chereau, se dirigía a su despacho en el automóvil fiscal conducido por el cabo-chófer Leopoldo Mauna Morales, por la calle Martín de Zamora en dirección al poniente, fue interceptado por un vehículo que chocó con el que viajaba el señor General; vehículo éste que fue rodeado por cinco individuos, uno de los cuales haciendo uso de un elemento contundente similar a un combo, rompió el vidrio posterior izquierdo y luego disparó contra el general Schneider, impactándolo en la región del brazo, en el hombro izquierdo y la muñeca izquierda, ocasionándole lesiones de carácter reservado, según pronóstico del Hospital Militar, donde fue llevado para su inmediata atención.»

El domingo 25 de octubre, el general Schneider falleció.

El suceso se interpretó oficialmente así:

a) El general Schneider fue asesinado por un banda de conspiradores «pagando con su vida su apego a la Constitución chilena».

b) El asesinato buscaba un pretexto «para una insurrección militar» que «impidiera el ascenso a la presidencia de Salvador Allende», pero «en una excepcional muestra de disciplina, el Ejército, herido tan profundamente por el atentado, reaccionó precisamente de la manera opuesta a la que buscaban los conspiradores, reiterando su adhesión a las reglas del juego constitucional».

c) El complot fracasó, a pesar de la brutalidad del «recurso

extremo del asesinato político» utilizado por los complotadores para desencadenar la insurrección militar.

Sin embargo, la realidad era muy distinta.

El Ejército «en una excepcional muestra de disciplina», ¡pero con respecto al Pentágono! no reaccionó como buscaba la fracción de los conspiradores que siguió adelante con el plan cancelado, porque una semana antes, Schneider había explicado cómo el Pentágono pensaba que «era mejor» permitir que Allende asumiera la presidencia de la República, seguir la táctica de «esperar y ver» y trabajar sobre condiciones «objetivas y de largo plazo para actuar sobre seguro, en caso de necesidad».

Incluso más todavía. Para impedir que la opinión pública chilena se enterara de la sucia trama que se escondía tras el asesinato del general René Schneider, los altos mandos militares de las tres ramas de las FF.AA. y de Carabineros, se pusieron de acuerdo para revelar parte de la trama, sacrificar con el retiro de las filas a una media docena de generales implicados, y permitir un «juicio suave» al ex general Roberto Viaux Marambio, jefe de la pandilla encargada de ejecutar a René Schneider y que estaba en contacto directo con los hombres de la ITT y de la CIA.

En suma, al revés de lo que dijeron los políticos de izquierda en los tres años que siguieron a este asesinato, la muerte del comandante en jefe del Ejército chileno en octubre de 1970 señalaba el enorme grado de influencia que en él tenía el Pentágono norteamericano para cualquier política de liberación por parte del Gobierno de la Unidad Popular.

(En febrero de 1971, el autor de este reportaje conversó con uno de los encargados de la UP sobre las relaciones con las Fuerzas Armadas, explicándole, todo lo que sabía sobre el asesinato de Schneider y lo que eso significaba. Éste le respondió: «Si tú publicas eso, te van a dar cadena perpetua, o fusilamiento, por traidor a la Patria al acusar de algo tan repugnante a nuestros gloriosos institutos armados.» En todo caso, se comprometió a comunicar a Salvador Allende la historia, llevándose una copia de un informe preparado por el autor de este reportaje. La respuesta vino en el Mensaje Persidencial ante el Congreso, del 21 de mayo de 1971, cuando, al referirse al papel de las Fuerzas Armadas «en el proceso de cambios de la vía chilena hacia el socialismo», Allende dijo que «a pesar de algunos agoreros y catastrofistas que dudan del patriotismo de nuestras fuerzas armadas... éstas, por su profesionalismo y respeto a la

Constitución, son LA GARANTÍA del actual proceso de cambios».)

Desde ese momento, para los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular pasó a ser un axioma que el general René Schneider era «símbolo del soldado con conciencia cívica y del hombre que sirve a la Patria en la paz obedeciendo a las leyes» (Salvador Allende, en su discurso de Santiago el 21 de diciembre de 1970).

Y, en un paso más adelante en la audacia política, Allende llegó a construir la tesis siguiente:

«Por eso quiero señalar que un pueblo consciente, organizado y disciplinado, de partidos políticos que entienden lealmente la unidad, de trabajadores organizados en sus sindicatos, en sus federaciones y en la Central Única, son la base granítica del proceso revolucionario. LO SON TAMBIÉN, y lo señalo, porque este proceso está dentro de los cauces legales; lo son, lo repito y lo subrayo, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, a las que rindo un homenaje, AL PUEBLO QUE VISTE UNIFORME, por su lealtad a la Constitución y a la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos» (Salvador Allende, discurso en el Estadio Nacional de Santiago, el 4 de noviembre de 1971).

Hay que tener claro que Allende se refería, y se refirió siempre cuando trató este tema, a los altos mandos militares. A nadie le cabía duda que la tropa, en un país donde existe la conscripción militar, eran hijos de obreros, campesinos y empleados con uniforme. Pero, el problema estaba con los mandos de esa tropa, su carácter de clase, sus tareas específicas en el armazón socioeconómico que se llamaba «Estado chileno». Nunca aceptó Allende discusión científica, objetiva, sobre ese tema. Nunca aceptó observaciones sobre a qué sectores de la sociedad chilena defenderían esos altos mandos en caso de una crisis generalizada de la estructura social chilena, causada por la emergencia de sectores populares en su camino hacia el poder y la participación efectiva en el desarrollo de una sociedad manejada hasta ese momento por una minoría oligarca y por los representantes de los grandes consorcios industriales, financieros y comerciales de los Estados Unidos.

El suceso que se cuenta a continuación, es típico de la actitud de Allende con respecto a las Fuerzas Armadas. A principios de abril de 1971, el senador Alberto Jerez, de la Comisión de Defensa del Senado y «coordinador» entre los generales y el Go-

bierno de la Unidad Popular, llamó a su oficina en el centro de Santiago al autor de este reportaje, para plantearle, aproximadamente, lo siguiente:

«Como tú sabes, a fines de este mes Salvador va a dar una clase magistral a la Guarnición Militar de Santiago. Es una clase que se hará en la Academia de Guerra del Ejército, ante unos 800 oficiales. Salvador me pidió que le reuniera lo mejor que exista sobre las Fuerzas Armadas chilenas, y yo le propuse tu nombre para que le hicieras un informe, para él saber sobre qué terreno pisa. Salvador está de acuerdo. Él te conoce, y sabe que eres un experto en asuntos militares chilenos desde el ángulo político... Tienes siete días para hacerlo...»

En unas veinte páginas escritas a máquina, tamaño oficio y doble espacio, el autor entregó un informe que, poco más o menos, contenía los hechos que ustedes van a leer en este capítulo, correspondientes a los años que van desde 1964 a 1970. Además, el informe contenía un esbozo de interpretación de la situación, señalando el fuerte peligro para la estabilidad del Gobierno UP que significaba la presencia en las Fuerzas Armadas de los mismos altos mandos que antes de la toma del mando presidencial.

A fines de abril, durante el desarrollo de un encuentro de periodistas de izquierda, Alberto Jerez tenía el siguiente recado de Allende: «Salvador agradeció mucho tu informe, pero me dijo que no le serviría de nada, porque tú hablas allí de unas Fuerzas Armadas fantasmas, sacadas de los libros de Lenin, y que él trata con seres humanos de carne y hueso. Me dijo que te explicara que las Fuerzas Armadas chilenas son de un tipo especial, que Lenin no previó en sus libros...»

Infelizmente para el Presidente constitucional de Chile, las Fuerzas Armadas «fantasmas» destruyeron el 11 de septiembre de 1973 su vida, el Palacio de la Moneda, la residencia de Tomás Moro y varias fábricas, además de asesinar a decenas de miles de trabajadores chilenos, encarcelando a otras decenas de miles y destruyendo todas las libertades del pueblo chileno. Los «fantasmas» inauguraron para mi país el fascismo más brutal aplicado en el mundo desde la noche que cayó sobre el pueblo alemán Adolfo Hitler y sus nazis.

No cabe en los propósitos de este reportaje explicar por qué Salvador Allende, y la mayor parte de las directivas de los partidos políticos de la Unidad Popular, tuvo esa actitud ciega y suicida con respecto a los altos mandos militares de Chile. Pero, es importante dejar constancia del hecho.

Esto nos pone en situación de volver a tomar el hilo de los acontecimientos que titulamos como «El caso Schneider».

Un problema para EEUU

Cuando a principios de 1964, el Pentágono norteamericano decidió poner un grado más de preocupación en sus relaciones con las Fuerzas Armadas chilenas, estaba dando el primer paso para «reparar y reacondicionar» el deteriorado último baluarte de la dominación imperialista en Chile, en caso de que las «condiciones actuales continúen mostrando una tendencia al peligro de una subversión obrera y campesina en Chile».

Para los generales norteamericanos del Comando Sur en la Zona del Canal de Panamá (que funciona con un costo de 136,5 millones de dólares al año, con 12 generales y almirantes para 10.500 hombres), encargados de «proteger y administrar» los Programas de Ayuda Militar a América Latina, el «caso de Chile», en 1964, era el caso de «problemas en potencia».

La situación política y económica del país demostraba una tendencia a un serio enfrentamiento entre los trabajadores, por un lado, y los intereses de los grandes monopolios chilenos y yanquis por otro. Era el último año del período presidencial de un representante de los monopolios chilenos (Jorge Alessandri Rodríguez, presidente de la Manufacturera de Papeles y Cartones, empresa monopólica central de un conjunto empresarial chileno-norteamericano de más de 500 millones de dólares de capital social), con claras señales de descalabro económico: más de 46 % de inflación, después de haber tenido un índice de 8 % en 1961, de 14 % en 1962 y de 45 % en 1963. La cesantía superaba el 7 %, es decir, más de 200.000 desocupados sobre un total aproximado de 2.800.000 chilenos considerados como «fuerza de trabajo». La deuda externa llegaba a 1.896 millones de dólares (de los cuales 1.629 eran créditos ya utilizados y 267 millones en créditos todavía no utilizados). La tasa de mortalidad infantil era de 102,9 por cada mil niños nacidos vivos.

Las diferencias de condiciones de vida entre las distintas clases sociales eran brutales: 1.000.000 de campesinos y obreros vivían con 380 dólares anuales de ingreso; mientras 60.000 propietarios de latifundidos, empresas monopólicas y administradores gerenciales de las mismas, gozaban de un ingreso promedio anual de 10.450 dólares.

En términos estadísticos, en 1964 la situación era, según estudios de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) creada por la Administración Frei, la siguiente:

Los obreros constituían el 50 % de la fuerza de trabajo y recibían el 21 % del ingreso total.

Los empleados sumaban el 22,8 % de la fuerza de trabajo y recibían el 27,2 % del ingreso total.

Los trabajadores por cuenta propia, eran el 21,8 % de la fuerza de trabajo y recibían el 17,6 % del ingreso total.

En cambio, los contratistas y rentistas eran sólo el 1,4 % de la fuerza de trabajo y absorbían el 26,4 % del ingreso.

El resto del ingreso (7,9 %) correspondía al Gobierno, por sus propiedades e impuestos directos.

Estas desigualdades eran mucho más graves en el campo, donde trabajaba el 25 % de la población activa chilena. Allí, el 3 % de los propietarios agrícolas considerados como latifundistas, se apropiaban del 37 % del ingreso generado en el sector; mientras el 71 % de las familias que vivían en el campo recibían sólo el 33 % del ingreso del sector.

Para mantener esta realidad, los sucesivos gobiernos radicales y conservadores, entre 1945 y 1964, habían montado un aparato represivo militarizado (el cuerpo de Carabineros) que, cuando se veía sobrepasado por la lucha de los trabajadores, era apoyado por las tres ramas de las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército. Sin embargo, la principal forma de «mantenimiento del orden» social era el engaño político y la supresión de las organizaciones sindicales. (Entre 1945 y 1964, la población sindicalizada chilena había disminuido en más de un veinte por ciento.)

En el engaño político, la situación se reflejaba en que la alianza de los partidos conservador y liberal (organización política pura de la oligarquía agraria, comercial y financiera), mantenía un 30 % de la fuerza electoral. El partido radical (formado por funcionarios del Estado y empresarios industriales ligados a las empresas norteamericanas del cobre, más algunos sectores latifundistas) mantenía un 20 % de esa fuerza electoral. La Democracia Cristiana, por su parte, que sólo a fines de la década del 50 comenzó a ser importante, tenía un 16 % de la fuerza electoral (era un partido desgajado, en los años 30, del partido conservador, y que, en 1964, estaba formado por la oligarquía industrial y por los técnicos de más alto nivel ligados a las empresas monopólicas tanto chilenas como norteamericanas).

Por su parte, la combinación de los partidos socialista y comunista, a principios de 1964, había llegado al 25 % del electorado, con una constante tendencia a aumentar sus simpatías entre los centenares de miles de trabajadores golpeados por la miseria y la cesantía, los cuales presionaban diariamente para obtener una ley de sindicalización campesina, mejoramiento de salarios, facilidades para crear sindicatos de obreros y empleados, reformas agrarias y lo más importante, la nacionalización de las minas del cobre, hierro y salitre en poder de empresas de los Estados Unidos, así como la nacionalización de los servicios telefónicos y de generación de energía eléctrica para la capital y la zona central, también en manos de empresas norteamericanas.

Así, la lucha presidencial de 1964, entre Salvador Allende (apoyado por una alianza socialista-comunista, más la mayor parte del partido radical a nivel de bases) y Eduardo Frei (jefe del partido demócratacristiano, más la alianza conservadora-liberal y un pequeño sector del partido radical), se dio en un contexto de una violenta campaña antiimperialista, un acuerdo generalizado sobre la urgencia de una ley de reforma agraria y una movilización de masas que no tenía precedentes en la historia del país. Incluso, los demócratacristianos, tomando la bandera del engaño político al pueblo, ya fracasados los radicales, los conservadores y los liberales, plantearon la necesidad de «una revolución», pero en «libertad», que proponía la expropiación del latifundio, la reforma bancaria, la expropiación de algunos consorcios industriales chilenos gigantes en manos privadas, la reforma tributaria y «un nuevo acuerdo» con las compañías del cobre Anaconda y Kennecott.

La situación amenazaba ser crítica para los grupos dominantes de la sociedad chilena, tanto norteamericanos como nacionales. Hasta ese momento, a partir de 1945, el Gobierno de los Estados Unidos y las empresas Anaconda, Kennecott, International Telephone and Telegraph y American Foreign Power, principalmente, habían manejado al Gobierno chileno y su Cámara de diputados y senadores, a través de sus empleados pagados en el partido conservador, liberal y, sobre todo, en el radical. El presidente radical Gabriel González Videla, por ejemplo, después que dejó la presidencia de la República en 1948, fue premiado por sus patrones norteamericanos de la Anaconda, la Kennecott, la Anglo Lautaro y la Ford Motor, a quienes había protegido durante su Administración, nombrándolo presidente de

la filial chilena de Radio Corporation of America, y vicepresidente del Banco Francés e Italiano. Así, entre 1948 y 1964, este Gabriel González Videla había pasado de ser un abogado sin ninguna fortuna, a uno de los hombres más acaudalados de Chile, solamente recibiendo el pago de sus servicios prestados desde La Moneda al Gobierno y a las empresas de los Estados Unidos. Otro caso típico es el del hombre más importante de la directiva del radicalismo en esos mismos años: Rodolfo Michels. Michels era el encargado de «administrar» los fondos que la Anaconda Company aportaba anualmente para «financiar» al partido radical. Todos los proyectos de leyes sobre «inversión extranjera», trato tributario a las empresas del cobre, hierro, salitre, teléfonos y electricidad, antes de ser presentados al Congreso por los Gobiernos radicales y los que los siguieron, eran discutidos primero en las oficinas de la Anaconda Chuquicamata. Cuando Michels «se retiró» de la vida política y fue nombrado vicepresidente de la Anaconda en Chile, fue reemplazado por el «tesorero» del partido radical, Constantino Tallar, el cual, al mismo tiempo, era «contratista» de los trabajos habitacionales y de construcción de la Anaconda.²

En 1964, con el radicalismo fragmentado, con fuerte tendencia de las bases a sumarse a la combinación de izquierdas que apoyaba a Salvador Allende, el Gobierno de los Estados Unidos y sus empresas multinacionales estaban en un problema: ¿a través de quiénes manejar el Gobierno de Chile, si ya los radicales no tenían ninguna «chance» de constituir un grupo coherente con real acceso a La Moneda y al Parlamento? Se pidieron informaciones a Chile y Robert Haldeman, presidente de la Braden Copper (filial de la Kennecott), explotadora del mineral de cobre de El Teniente, en la provincia de O'Higgins, explicó cómo, a fines de 1963, había sostenido conversaciones con Eduardo Frei (abogado al servicio del grupo oligarca Osvaldo de Castro, estrechamente ligado al consorcio yanqui Anglo Lautaro), jefe de la Democracia Cristiana, candidato presidencial ya entonces para las elecciones de septiembre de 1964; el cual había pedido «ayuda financiera» a la Kennecott para la campaña presidencial, a cambio de una promesa formal de «no nacionalizar las minas de cobre» y de «pactar un acuerdo técnico» que «beneficie mutuamente tanto a Chile como a la Kennecott». Haldeman informó a su Gobierno que «es mi opinión» que Eduardo Frei es «una persona de confianza», que «cree en lo que dice». El informe de Haldeman, agregado al de la Anglo Lautaro y de la

propia International Telephone and Telegraph (ITT), en cuyo equipo ejecutivo figuraba uno de los hombres más importantes de la directiva de la Democracia Cristiana, Guillermo Correa Fuenzalida (a su vez, principal ejecutivo del grupo oligárquico-financiero-industrial del Banco de Chile, que manejaba un capital social de más de 600 millones de dólares), decidió al Gobierno de los Estados Unidos a formar, con ayuda de las empresas interesadas en «los sucesos de Chile», una caja electoral para la campaña presidencial de Eduardo Frei en 1964.³

Se reunieron VEINTE MILLONES DE DÓLARES, administrados por la AID (Agencia Internacional para el Desarrollo, del Gobierno de Washington), para financiar la campaña electoral de Eduardo Frei. El acuerdo fue ceder a la presión popular para una reforma agraria, sindicalización campesina y llegar a «nuevos acuerdos» que aparentaran nacionalizaciones, con la Anglo Lautaro para el salitre, la American Foreign Power para la electricidad, la ITT para los teléfonos y la Anaconda y la Kennecott para el cobre. Como «consejero» económico para «garantizar las medidas en favor del capital procedente de los Estados Unidos», se nombró a David Rockefeller, del Chase Manhattan Bank, y como «coordinador» entre los Rockefeller y Eduardo Frei, al ingeniero Raúl Sáez, de la Corporación de Fomento de la Producción (este Raúl Sáez, desde abril de 1974, es «asesor económico» de la Junta Militar que gobierna en Chile).⁴

Los veinte millones de dólares no fueron una mala inversión para los Estados Unidos. Eduardo Frei ganó las elecciones presidenciales con el 56 % de los votos emitidos. Pero Salvador Allende elevó su cuota de votación, de más o menos el 25 %, al 39 %. Esto preocupó mucho a los «sociólogos» de la American University de Washington (centro de estudios superiores administrado por el Pentágono para sus necesidades de dominio mundial), y recomendó una serie de medidas para «evitar el peligro de subversión popular en Chile». Las medidas estaban centradas en una readecuación de la capacidad de las Fuerzas Armadas chilenas para hacerse cargo de la situación en una «circunstancia extrema».

Los generales norteamericanos ordenaron a la Fundación Ford que hiciera uso de su control de algunas universidades norteamericanas y sudamericanas para iniciar un estudio científico de los altos mandos de las fuerzas armadas chilenas. El sociólogo Roy Hansen, de la Universidad de California, optó por realizar una memoria de graduación sobre el tema. Al mismo

tiempo, en la American University, se iniciaron los estudios para realizar una investigación masiva, en profundidad, de la sociedad chilena, inserto en lo que se llamó el «Proyecto Camelot.»⁵

A fines de 1964, Roy Hansen llegó a Chile, se conectó con Alvaro Bunster en la Universidad de Chile, el cual después sería enganchado para el «Proyecto Camelot» (curiosamente, Alvaro Bunster fue embajador de Chile ante Gran Bretaña en la Administración de Salvador Allende) y a través de la hermana de Bunster, Ximena, obtuvo el *statu* de sociólogo-investigador. Pero el centro de las operaciones científicas de Hansen, naturalmente, estaba en las Fuerzas Armadas chilenas. Para operar allí se conectó con el secretario general de la Academia de Guerra del Ejército chileno: ¡coronel René Schneider Chereau! El coronel Schneider permitió al norteamericano Hansen el acceso ilimitado a la biblioteca de la Academia de Guerra, a sus planes de estudio y a entrevistas personales con el cuerpo de generales.

Al avanzar en su estudio, Hansen se encontró con que el Ejército chileno tenía una superestructura destinada a una tropa inmensamente mayor a la que manejaba (un general por cada mil hombres, es decir 32 generales para 32.000 hombres más o menos, y un coronel por cada doscientos hombres). Del mismo modo, vio que «la fuerza decisiva» en el aparato militar de mi país era el Ejército. Concentró, entonces, su investigación en él con la preciosa ayuda del entonces coronel René Schneider Chereau. El resultado del trabajo de Hansen, considerado «secreto» para el Ejército chileno, se llamó *Cultura Militar y Declinación Organizativa: un Estudio del Ejército de Chile*. Una copia de su estudio ingresó al sector «clasificado» de la biblioteca de la Academia de Guerra del Ejército chileno; otra copia quedó en la Biblioteca de Sociología de la Universidad de California y el resto de las copias pasaron al Pentágono.

Años más tarde, en 1969, algunos periodistas chilenos tuvieron acceso a la copia «clasificada» existente en Chile, y un detalle de su contenido puede leerse en la edición número 21 de julio-agosto de 1971, de la revista «Causa MI», editada en Santiago de Chile.

La síntesis del trabajo financiado por la Fundación Ford y también por la Rand Corporation, podría ser esta:

En 1964, para Roy Hansen, las Fuerzas Armadas chilenas estaban en evidente peligro de desintegración a causa de su absoluta falta de participación en las decisiones importantes del país. Decía el sociólogo yanqui que, a pesar de que la opinión de las

Fuerzas Armadas chilenas había sido decisiva para el desarrollo político del país, desde hacía cuarenta años se les estaba utilizando sólo como «fantasma aterrador», pero, al mismo tiempo, relegándolas a un papel indecoroso de guardianes de tercer orden del sistema imperante y, lo que es más, colocándolas en un quinto o sexto lugar en cuanto a nivel económico. Decía que, desde el golpe militar de 1924 (dado por la guarnición de Santiago para obligar a la mayoría oligárquica del Parlamento a aprobar leyes de reformas en los salarios y sistemas de previsión y salud de los obreros, a fin de impedir una «insurrección bolchevique» de las masas), los militares chilenos no habían tenido necesidad de intervenir activamente en política, y eso los había ido relegando al cuarto de los trastos inútiles por parte de las sucesivas Administraciones.

Señalaba Hansen que había un enorme peligro de desintegración de la estructura militar chilena, lo cual hacía «prever» que los altos mandos, para defenderse del naufragio, tendrían una marcada tendencia, en el futuro próximo, a tener una participación activa en política y en las decisiones nacionales de los círculos dominantes.

Investigando sobre qué pensaban los generales del resto de la sociedad en que vivían, llegó a algunas conclusiones:

Un profundo desprecio por los civiles, a quienes los generales consideraban inútiles, corrompidos e ignorantes. Algunos generales opinaron que los parlamentarios, los políticos civiles y muchos funcionarios de alta jerarquía del Estado «no tienen idea de lo que es Chile, cómo hay que defenderlo de las agresiones externas y de la subversión», «son ignorantes», «y también incapaces de llevar a cabo cualquier tarea difícil». Los generales también opinaron que «La Patria» sólo puede ser defendida por las Fuerzas Armadas; los políticos civiles son incapaces. Que los civiles desprecian a los militares, pero recurren a ellos cuando sienten que no pueden frenar la «subversión del populacho». Sobre las opiniones políticas de los altos mandos, las estadísticas de Hansen fueron concluyentes: 10 % de derechas, 80 % de centro y 10 % de izquierdas. Pero, con la aclaración de que, para los altos mandos militares chilenos, «izquierdas» significaba el programa de reforma agraria, bancaria y nuevo trato con las empresas norteamericanas, de la Democracia Cristiana dirigida por Eduardo Frei. Así, para los generales, la combinación de partidos que había apoyado a Salvador Allende, era de «extrema izquierda» y no contaba con ninguna simpatía entre ellos.

Cuando, durante la primera mitad de 1965, el Pentágono quiso poner en práctica en la segunda parte de su proyecto de largo plazo de «preparación» de las Fuerzas Armadas chilenas como reserva para mantener la estructura de la sociedad burguesa chilena en caso de catástrofe de los políticos civiles, hubo problemas serios. Esa segunda parte era el «Proyecto Camelot», que tenía la intención de estudiar, clasificar y ponderar todos «los elementos de presión social, política y económica contra el sistema establecido» para lograr «un sistema de control de esas presiones». Cuando se iba a comenzar a aplicar, los militantes de partidos de izquierda de la Universidad de Chile lo denunciaron. El escándalo fue tan enorme que la propia Democracia Cristiana, para cubrir las apariencias, apoyó una investigación del caso en el Parlamento. Los parlamentarios de izquierdas más un sector de demócratacristianos, calificaron el «Proyecto Camelot» como «un plan de espionaje de una potencia extranjera en contra de Chile», y el propio Gobierno de Washington tuvo que declarar, en junio de 1965, que «hemos sugerido a las autoridades correspondientes que se suspenda la aplicación del «Proyecto Camelot» en Chile y «en Colombia».

Pero el trabajo en las Fuerzas Armadas chilenas no se suspendió. Las misiones militares de los Estados Unidos (que tienen su sede en el propio edificio del Ministerio de Defensa de Santiago, vedado a los civiles chilenos) iniciaron una «asesoría a presión» sobre los planes de estudio de la Academia de Guerra, y recomendaron que todos los alumnos del último curso de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins (que prepara oficiales para el Ejército) y de la Escuela de Aviación Capitán Avalos (que prepara oficiales para la Fuerza Aérea), deberían pasar un período de instrucción de cuarenta días en los fuertes del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, en la Zona del Canal de Panamá.

Esta «recomendación» del Pentágono al alto mando militar chileno, fue puesta en práctica en 1968 por el entonces director de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins y ya «hombre de confianza» del Pentágono en el Ejército chileno: ¡el general de brigada René Schneider Chereau!

Al mismo tiempo, Schneider, que era profesor de la Academia de Guerra, participaba activamente en la introducción de nuevas cátedras, que tenían que ver con economía política, administración estatal, comercio exterior, políticas de industrialización, historia de los partidos políticos chilenos, reforma agraria, reforma

urbana, políticas bancarias, etc. Es decir, todo un plan de preparación de «administradores públicos», como parte importante de la instrucción de los nuevos generales del Ejército chileno. Del mismo modo, se introdujeron cátedras intensivas de estudios de «marxismo» a través de cursos sobre Marx, Lenin y Mao Tse-tung.⁶

Desde 1968, el propio «profesor René Schneider», después de largas sesiones de trabajo con los miembros de la misión militar norteamericana en Santiago, comenzó a desarrollar la «teoría moderna de la seguridad nacional», que consistía en sostener que el verdadero significado de que «las Fuerzas Armadas son la garantía de la seguridad nacional» tiene un doble carácter: la de seguridad con respecto a los enemigos externos, y la de seguridad con respecto a los enemigos internos, y que, en las «condiciones actuales de Chile», los enemigos «internos» de la seguridad nacional son mucho más peligrosos, reales y latentes que los enemigos «externos»: Y, ¿quiénes son esos enemigos «internos»? Según la teoría del Pentágono, vía general René Schneider, son todos aquellos que, aprovechándose del descontento popular a causa de injusticias sociales y abusos de los poseedores de la riqueza, tratan de sacar a Chile del mundo «occidental y cristiano» en que nació y está destinado a seguir viviendo. Entre esos enemigos «internos», por supuesto, se inscriben con honores los «que propician el socialismo marxista».

Cursos similares y teorías semejantes se desarrollaban, al mismo tiempo, en la Marina, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Carabineros. Todos a cargo de «asesores norteamericanos de Inteligencia» y todos a través de altos mandos del tipo del general de brigada René Schneider Chereau.

Sin embargo, mientras el Pentágono daba primera prioridad en Chile al mejoramiento de sus relaciones con las Fuerzas Armadas nativas, el propio Gobierno de Eduardo Frei, demasiado ocupado en pavimentar el camino de los buenos negocios de las empresas gigantes de los Estados Unidos, no escuchaba las peticiones materiales de sus generales que, insuflados de un nuevo espíritu después de tres años de comenzar a adiestrarse para ser «maestros en el arte militar y en el arte del gobierno civil», exigían una mayor participación en el reparto de las riquezas generadas por el trabajo de los obreros y campesinos chilenos.

En 1969, comenzó a dibujarse con claridad una nueva situación crítica, social y económica. Transcurridos cinco años ya de la llamada «revolución en libertad» de Eduardo Frei, era no-

torio el fracaso. El desarrollo económico se había estancado a un nivel increíblemente bajo, llegando el crecimiento del producto geográfico bruto, en 1967, a 0,0 %; en 1968, a 0,6 %; y la proyección para 1969 indicaba no más de 0,7 %. Los precios de los alimentos subían constantemente: en 1967 tuvieron un alza del 14,5 %; en 1968 fue del 25,5 %; y la proyección para 1969 era de 30,7 %. En ese mismo año, las remuneraciones promedio de 1.300.000 obreros urbanos y agrícolas, eran TREINTA Y CINCO VECES MENORES a los ingresos promedio de unos 62.000 contratistas y propietarios a nivel capitalista. La reforma agraria, que había prometido hacer 100.000 nuevos propietarios, apenas había conseguido expropiar menos de un tercio de los latifundios. La deuda externa había subido de 1.896 millones de dólares en 1964, a un total de 2.765 millones en 1969, al tiempo que las empresas norteamericanas y extranjeras estaban retirando del país por concepto de utilidades, depreciaciones, amortizaciones e intereses MAS DE UN MILLÓN DE DÓLARES AL DÍA. Durante el Gobierno de Alessandri (1958 a 1964), el promedio anual de este retiro fue de 170 millones de dólares; mientras que Eduardo Frei, desde 1965 a 1969 lo había subido a más de 344 millones. Andrés Zaldívar, ministro de Hacienda Pública de Frei, comunicaba en noviembre de 1969 que las remesas al exterior, por aquellos conceptos, sumarían alrededor de 450 millones de dólares. Por otra parte, el Gobierno había comprado a la American Foreign Power (explotadora de la Compañía Chilena de Electricidad) en 186 millones de dólares, maquinarias que valían menos de 40; había comprometido el pago de mil millones de dólares a la Anaconda Company, por una «nacionalización pactada» de Chuquicamata, el mayor centro cuprífero del mundo, por instalaciones que valían menos de 170 millones. Con la Kennecott Copper, había llegado a un acuerdo similar, pagando 80 millones de dólares por el 51 % de instalaciones cuyo valor total no llegaba a los 70 millones en El Teniente (para conocer con mayor detalle esta situación, ver mi obra *El imperialismo yanqui en Chile*).

Todo esto, difundido entre el pueblo por los periodistas de izquierdas y las publicaciones patrióticas, había provocado un enorme sentimiento antiimperialista que se expresaba en la agitación constante de obreros, campesinos, empleados y estudiantes, exigiendo la expulsión de las compañías norteamericanas y la expropiación de todas las empresas industriales con mayoría de capital de Estados Unidos que, durante la Administración de

Frei, estaban produciendo el fenómeno de la «desnacionalización industrial» de Chile. Al mismo tiempo, la lucha campesina por la tierra había llegado al extremo de producirse tomas de latifundios por la fuerza, mientras la sindicalización en el campo había elevado su nivel de tres mil campesinos afiliados en 1964 a cerca de 120.000 en el último mes de 1969. En las ciudades, el promedio de huelgas obreras por mejores salarios triplicaba el promedio de la Administración anterior. Mientras, profesores y estudiantes se mantenían en constante combate por la reforma educacional en los niveles superiores. La situación era tan explosiva, que Eduardo Frei, pidió a Nelson Rockefeller que no pasara por Chile en sus visitas a Latinoamérica como paso previo a la preparación de su famoso *Informe sobre América Latina*; en el cual, ese mismo año, recomendaría al Gobierno de los Estados Unidos promover la toma del Poder en los países sudamericanos por parte de «la oficialidad progresista de la nueva generación», por ser la «organización más coherente» en las sociedades latinoamericanas. De esa «oficialidad progresista» a que se refería Rockefeller, formaban parte los altos mandos que se preparaban en la Academia de Guerra del Ejército chileno, bajo la asesoría y supervisión de las misiones militares norteamericanas.

En medio de esta tormenta socio-económica, a mediados de 1969, el general de brigada Roberto Viaux Marambio, comandante en jefe de la Primera División de Ejército, con sede en Antofagasta, recogiendo el «sentir de la oficialidad joven» (coroneles, tenientes coroneles, mayores y capitanes), hizo llegar una carta-petitorio al comandante en jefe del Ejército, Sergio Castillo Aranguiz, para su entrega al presidente Eduardo Frei. La carta-petitorio del general Viaux decía que «la seguridad nacional y la tranquilidad interna del país» dependían de las Fuerzas Armadas y que, «a nuestro juicio», el Gobierno de Frei, igual que los anteriores, no se ha preocupado por mantener en funcionamiento unas Fuerzas Armadas modernas, «bien equipadas y con participación efectiva en las grandes decisiones nacionales». La carta exigía la puesta en práctica de una «nueva política de Gobierno con respecto a las Fuerzas Armadas», sueldos de los altos mandos «de acuerdo con su alta jerarquía social y responsabilidad nacional» (Viaux se quejaba en el texto de la comunicación porque «un general de la República gana menos que un obrero calificado del mineral de cobre de Chuquicamata», lo cual era cierto), compra de material de guerra adecuado, y parti-

4
cipación de la alta jerarquía militar en el desarrollo económico, político y social de Chile.

El general Viaux confiaba en que esa carta iba a servir para tener un diálogo de nuevo tipo con el presidente Frei, porque la había discutido con el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división René Schneider Chereau, el cual, incluso, le había hecho sugerencias sobre la parte de la «participación» de los generales en la vida económica y política del país.

Pero Eduardo Frei no escuchó a René Schneider, y en cambio sí lo hizo con Sergio Castillo, el general comandante en jefe del Ejército, íntimo amigo personal y «freista» por y sobre todas las cosas. El general Roberto Viaux fue dado de baja el sábado 18 de octubre, relevándolo de su mando de la Primera División y llamándolo a Santiago. Viaux regresó a Santiago, y el martes 21 de octubre amaneció como jefe de una insurrección militar localizada en el Regimiento Tacna, con apoyo de la Escuela de Suboficiales, la Academia de Guerra y parte del Regimiento Blindados Número 2. Al mediodía del martes 21 de octubre, para los reporteros que cubrimos el suceso, estaba claro que el general Roberto Viaux contaba con el apoyo y la simpatía encubiertos de la mayoría absoluta de los mandos de Santiago, y que, técnicamente, si Viaux se lo proponía, no había nada que impidiera que Eduardo Frei fuera derrocado y reemplazado por un Gobierno militar sin disparar un tiro. Sin embargo, después de una conversación telefónica con el jefe del Estado Mayor del Ejército, general René Schneider, el amotinado general Viaux hizo una proclama en que enfatizó que «mi movimiento no es contra el Presidente de la República», sino que constituye un recurso extremo «para llamar la atención» sobre la necesidad de colocar al Ejército en el lugar que le corresponde.

Al día siguiente, 22 de octubre, el general Roberto Viaux ponía fin a su insurrección, consiguiendo los siguientes puntos:

1) El comandante en jefe del Ejército, general Sergio Castillo se acogía a retiro... ¡y era reemplazado por el general de división René Schneider Chereau!

2) El general Viaux aceptaba irse a retiro, considerando que la presencia del general Schneider como comandante en jefe era garantía de que sus peticiones serían escuchadas.

El Pentágono había hecho una obra maestra en ese momento crítico para el dominio imperialista y oligárquico en Chile: había colocado al mando del Ejército, pilar fundamental de las Fuerzas Armadas chilenas, a un «hombre de nuestra absoluta

confianza» y, lo más importante, «no ligado» a los partidos políticos.

El general Schneider obligó a Frei a cumplir con parte del petitorio original de Viaux: en enero de 1970, los sueldos de los generales fueron elevados desde un equivalente de 6 sueldos vitales a 12 sueldos vitales. Es decir, los generales pasaron a integrar el grupo superior del 2 % de los hogares chilenos que tienen mayores ingresos. Antes, estaban en el grupo del 10 % superior de los hogares con mayores entradas. (Sueldo vital es la cantidad mínima de remuneración fijada por ley, cada año, para los empleados del Estado y de las empresas privadas). Del mismo modo, el presupuesto de gastos en material de guerra fue elevado en un 50 % para el año fiscal siguiente, y se comenzaron a estudiar planes de ampliación del número de oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. (Esos planes de ampliación del número de oficiales sólo se hicieron efectivos a partir de 1971, bajo la administración de Salvador Allende.)

Por otra parte, se acordó que el propio cuerpo de generales del Ejército estudiaría «un plan de acción» a largo y corto plazo, para poner en práctica la demanda del general Viaux de «dar una verdadera responsabilidad a las Fuerzas Armadas como la solución de los grandes problemas nacionales». Ese plan, en el año 1970, sería diferido por los propios generales, para ocuparse de la forma de intervenir «en busca de la paz social», en caso de que la lucha electoral por la contienda presidencial desembocara en enfrentamientos violentos entre distintas facciones políticas: situación que fue amenazante durante todo el año 1970 antes del 4 de septiembre, día de los comicios presidenciales de Chile.

Allende, presidente

En abril de 1970, la campaña presidencial estaba causando algunas sorpresas para los «expertos», que habían dado por «cadáver político» a Salvador Allende, el candidato de la Unidad Popular (el senador socialista había sido derrotado tres veces en las campañas presidenciales de 1952, 1958 y 1964). Las encuestas de opinión pública demostraban que en los extremos norte y sur del país, en la concentración industrial de Concepción y en Santiago, las simpatías por Allende, sobre todo entre los obreros, campesinos y empleados, le aseguraban un por-

centaje de votación superior al 35 %. Como la elección presidencial se daba con tres candidatos (los otros eran el ex presidente de la República Jorge Alessandri, y el senador demócratacristiano Radomiro Tomic) había «grandes posibilidades» de que Allende ganara estrechamente la votación del día 4 de septiembre del mismo año.

En la última semana de abril de 1970, hubo una reunión importante en la casa de Patricio Rojas, ministro del Interior del Presidente Eduardo Frei, a la que asistieron el ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar; el senador demócratacristiano Patricio Aylwin; el senador nacional (conservador) Pedro Ibáñez, y el director de la empresa Manufacturera de Papeles y Cartones, Arturo Matte Larraín. El tema de la conversación fue único: cómo evitar que Salvador Allende fuera Presidente de la República si ganaba las elecciones en septiembre.

La Constitución chilena vigente hasta el asalto fascista militar a la democracia burguesa, establecía que si el candidato triunfante en las elecciones presidenciales «no obtiene la mitad más uno de la votación», entonces, cincuenta días después, el Parlamento «podrá proclamar Presidente a cualquiera de los dos candidatos que hayan obtenido las dos primeras mayorías». Es decir, el Parlamento podía elegir «al segundo». De esto se colgaron los contertulios de aquella reunión para comenzar una campaña de opinión pública con el propósito de hacer «elegir al segundo de Allende», fuera éste Tomic o Alessandri. A fin de dar un barniz de «legitimidad estatal» a esta maniobra, los contertulios acordaron pedirle al comandante en jefe del Ejército, general René Schneider Chereau, que declara públicamente que las Fuerzas Armadas «garantizarían» la elección del segundo candidato presidencial, en caso de que fuera necesario.

Patricio Rojas habló con Schneider, y a través de Andrés Zaldívar, se obtuvo que Agustín Edwards ordenara al director de su periódico, «El Mercurio», que hiciera entrevistar al general comandante en jefe del Ejército. El día 8 de mayo de 1970, en primera página, apareció la entrevista al general Schneider, el cual, en síntesis, estableció los siguientes puntos:

«El Ejército va a garantizar el veredicto constitucional».

«El Ejército es garante de elección normal, de que asuma la Presidencia de la República quien sea elegido por el pueblo o por el Congreso Pleno». (Esta era la esencia de la cuestión: Schneider decía que los militares garantizarían la asunción como Presidente de quien sacara el 51 % o más de los votos en

septiembre —imposible para Allende—, o del segundo candidato, si el primero —Allende— sacaba menos del 51 %. Así cumplía con el encargo de la colusión demócratacristiana-conservadora. Pero Schneider fue más allá, y habló de «garantizar» sólo una «elección normal». Esto abría la posibilidad de que los militares encontraran «anormal» una elección en que Allende sacara más del 51 % de los votos, y la anularan, para llamar a nuevas elecciones.)

«La intervención en política está fuera de todas nuestras doctrinas. Somos garantes de un proceso legal en el que se funda toda la vida constitucional del país».

«Si se producen hechos anormales (convulsión interna), nuestra obligación es evitar que ellos impidan que se cumpla lo que indica la Constitución». (En estos dos puntos, Schneider aclara que los militares no se abanderizarán con los partidos políticos, pero actuarán si se pone en peligro el sistema de dominio del imperialismo norteamericano y la oligarquía nacional de la sociedad chilena —«la vida constitucional del país»—. Es el mismo argumento utilizado por los generales fascistas el 11 de septiembre de 1973 para destruir a sangre y fuego la democracia burguesa chilena, cuando se mostró inadecuada para defender los intereses de los dueños de Chile.)

«Quien tenga una inquietud grande con respecto a ciertas ideas, ciertas tendencias o ciertas actividades políticas y desee participar en ellas, lo mejor es que deje el uniforme y las abrace como un civil». (Schneider hacía una severa advertencia a un débil porcentaje de mandos medios del Ejército, que mostraba ciertas simpatías con la candidatura de Allende. En realidad, lo que Schneider ponía en práctica era una llamada de atención hacia una amenaza de «rebrote» de ideas progresistas en los mandos militares, después que durante los años 1961 y 1962 se había completado la tarea de limpieza interna, llamando a retiro a todos los oficiales sospechosos de simpatizar con «ideas socialistas».)

Sin embargo, llegó el 4 de septiembre de 1970, y la situación política se presentó de manera distinta a como la habían planificado los dirigentes reaccionarios de la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y las comandancias en jefe de las Fuerzas Armadas. Aun cuando los resultados fueron los previstos (Allende con 1.075.000 votos, el 36,3 %; Alessandri con 1.036.000 votos el 34,9 %; y Tomic con 824.000 votos, el 27,8%); la «presión política» era muy distinta a lo pensado. El triunfo relativo de

Allende, en la noche del 4 de septiembre, fue recibido por su millón de simpatizantes con una explosión de entusiasmo, se hicieron fiestas en las calles, manifestaciones en Santiago, Valparaíso, Concepción y demás ciudades importantes... Y lo inesperado: grandes sectores de la juventud democratacristiana y de obreros de ese partido, en la misma noche del triunfo de Allende, salieron a unirse a las manifestaciones de la Unidad Popular, formando una especie de espontáneo «frente antiimperialista» que, evidentemente, hacía aventurado y brutal elegir, en cincuenta días más, como Presidente de Chile al segundo.

Además, el candidato Radomiro Tomic (el cual no estaba enterado del juego de su directiva manejada por Frei), al mediodía del 5 de septiembre acudió a la casa de Salvador Allende para «saludarte como el ganador y futuro Presidente». Allende frente a centenares de periodistas, abrazó a Tomic y le respondió: «Tu gesto moral consolida nuestra amistad de treinta años.»

Había que buscar «un nuevo método de escamotear el triunfo de Allende». Apresuradamente, durante todo el domingo 6 de septiembre, hubo reuniones secretas en las cuales participaron los senadores Pedro Ibáñez y Francisco Bulnes, por parte del candidato Alessandri; y los ministros de Hacienda, Andrés Zaldívar; de Defensa, Sergio Ossa Pretot; de Economía, Carlos Figueroa; y del Interior, Patricio Rojas, por parte del Gobierno de Eduardo Frei. Separadamente, también se reunieron ese día los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, general Carlos Guerraty; de la Marina, almirante Jorge Porta Angulo; de carabineros, general Vicente Huerta; y el jefe de la guarnición de Santiago, general (de Ejército) Camilo Valenzuela.

En seguida, el general Valenzuela y el ministro de Defensa, Ossa Pretot, tuvieron una conversación con el comandante en jefe del Ejército, general Schneider. La proposición era muy simple: Convencer a Eduardo Frei de la necesidad de impedir a toda costa el triunfo de Allende en el Parlamento, por medio de una insurrección militar que desembocara en la renuncia de Frei, el nombramiento de una Junta Militar de Gobierno y el llamamiento a nuevas elecciones presidenciales, en el plazo de seis meses, solamente entre dos candidatos. Para justificar la insurrección militar, se proponía un plan de caos social provocado por un «pánico financiero» y una «oleada de atentados terroristas».

El general Schneider estuvo de acuerdo pero puso dos condiciones: primera, que él no participaría en esa Junta Militar,

retirándose del servicio activo en el momento de la proyectada insurrección; y segunda, que se informara de estos proyectos a la misión militar norteamericana, a fin de obtener «su apoyo» o servicios de «su experiencia».⁷

Desde la misma tarde del domingo 6 de septiembre, los conspiradores empezaron a poner en práctica lo acordado, comenzando una gigantesca red de llamadas telefónicas, advirtiendo a los usuarios que «los marxistas se quedarán con todo el dinero» y es necesario «retirar los ahorros y depósitos de cuentas bancarias». Desde el lunes 7 de septiembre, los locales de los bancos comerciales, estatales y de sistemas de ahorro y préstamo para construcción de viviendas amanecieron con largas filas de depositantes que deseaban retirar sus fondos. Dos semanas después de las elecciones, se habían retirado de las cuentas corrientes en el sector privado en los bancos comerciales y el Banco del Estado, 611 millones de escudos (unos 50 millones de dólares); de los depósitos de ahorro en el Banco del Estado, se retiraron en el mismo período 54 millones de escudos (alrededor de 4,5 millones de dólares); los retiros en fondos de certificados de ahorro reajutable fueron de 11 millones de escudos (unos 900.000 dólares); y en las cuentas de ahorro y préstamo para construcción de vivienda, se retiraron 322 millones de escudos (más de 26 millones de dólares).

Los grandes monopolios comenzaron a exigir el pago al contado, por ventas que antes se hacían a plazos a base de materias primas, a los empresarios medianos y pequeños. Al mismo tiempo, los monopolios suspendían sus compras a las empresas medianas y pequeñas, con lo cual les provocaban un doble problema de financiamiento. Ésta fue una hábil maniobra para oponer los intereses de los pequeños y medianos empresarios a los de los obreros, campesinos y empleados que simpatizaban con Allende, ocultando la realidad esencial de la contradicción entre los grandes monopolios y el resto de la sociedad.

La parte del «pánico financiero» se completó con la fuga de divisas, la especulación de dólares en el mercado negro y el aumento artificial de viajes al extranjero, en maniobras ilícitas que contaban con la protección de los ministros de Hacienda y de Economía, que eran cómplices en el complot.

Las ventas de dólares para viajar al extranjero, que desde enero a agosto de 1970 mostraban un promedio de 5,3 millones de dólares al mes, subieron en septiembre a 17,5 millones y en

octubre llegaron a 13,6 millones. El precio oficial del dólar era de 12,2 escudos por unidad, y en el mercado negro se llegó a cotizar a 70 escudos por unidad.

El día 13 de octubre, los dirigentes de la Confederación de la Pequeña Industria y Artesanado informaban que «los porcentajes de disminución del ritmo de actividad es del siguiente orden: Santiago, 53 %; Arica, 28 %; Antofagasta, 20 %; Coquimbo, 83 %; Valparaíso 30 %; Colchagua, 50 %; Concepción, 3 %, y los Angeles, 53 %». Alarmados, estos pequeños empresarios y artesanos señalaban que «en todo el país, las ventas han bajado en 38,4 %» y «tenemos existencia de trabajos solamente para 15 días y recursos para pago de jornales sólo para 20 días más».

El 23 de septiembre, cumpliendo con su parte en el complot, el ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, pronunció un discurso por la cadena nacional de radio y televisión en que daba cifras aterradoras sobre el descalabro financiero y decía que «la situación económica del período pstelectoral derivaba de factores psicológicos» y que «los resultados más que probables de esta situación serían el de un desastre económico completo y generalizado».

En suma, la parte de «pánico financiero» del complot para impedir que Allende fuera elegido Presidente en el Parlamento el día 24 de octubre de 1970, se cumplió a la perfección. ¿Qué les falló entonces a los conspiradores, que no pudieron impedir la elección de Allende? Les falló el Pentágono, y con él, el generalato de las Fuerzas Armadas chilenas. La historia es esta.

A través de Arturo Matte Larraín, uno de los dueños del gigantesco monopolio del papel Manufacturera de Papeles y Cartones, los conspiradores establecieron un puente entre el presidente Eduardo Frei y la International Telephone and Telegraph (ITT), la cual, en combinación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), había decidido dar «todo su apoyo» a un golpe que impidiera la ratificación de Allende en el Parlamento chileno. Los «contactos» de Matte Larraín eran los ciudadanos norteamericanos Robert Berrellez y Hal Hendrix, ambos en el equipo de agentes latinoamericanos de la CIA, y ambos funcionarios de «relaciones públicas» de la ITT (este doble cargo de relacionador público y agente de la CIA parece ser muy socorrido en los Estados Unidos, ya que el actual Secretario de Prensa de la Junta, Federico Willoughby McDonald, chileno, figuraba hasta el día del golpe del 11 de septiembre de 1973 como «relacionador público» de la Ford Motor en América Latina).

Así, Arturo Matte Larrain, el día 8 de septiembre, había tenido ocasión de informar a Frei cómo la ITT estaba presionando en Washington para que el Gobierno de los Estados Unidos apoyara una eventual Junta Militar que impidiera el nombramiento de Allende. Y como ya se había aprobado por varios consorcios norteamericanos con intereses en Chile (Anaconda, Kennecott, ITT, Bank of America, First National City Bank, Anglo Lautaro y Chase Manhattan, entre otros), se inició el plan general de «presión», que consistía en que los bancos no deberían dar créditos o demorar los ya aprobados; las compañías deberían demorar en hacer entregas de productos, envíos de dinero, despacho de repuestos, etc.; retirar toda la ayuda técnica y «hacer presión sobre las compañías de ahorro y préstamo para que se declaren en bancarota». Matte le explicó a Frei que la ITT estaba dispuesta a poner todo el apoyo «económico» que fuera necesario, si el Gobierno de los Estados Unidos daba el visto bueno a la conspiración.

La respuesta de Frei, ese 8 de septiembre fue más o menos la siguiente: Yo no puedo hacer pedazos mi imagen de demócrata, por eso mismo, si el «desarrollo de la situación continúa», espero «que me derroquen a la luz pública y me exilien por un tiempo». Sin embargo, tienen todo mi apoyo personal, no haré nada por impedir que el colapso financiero y económico sirva de caldo de cultivo a una buena receptividad pública a un golpe militar que «ordene las cosas». Pero no haré nada, absolutamente nada que haga caer la sospecha pública sobre mí. Quiero cuidar mi imagen política por sobre todas las cosas.⁸

Más tarde, Matte, por intermedio de Hendrix de la ITT, recibió el recado desde Nueva York, del vicepresidente de ITT, Edward Gerrity, de que «convenciera a Frei de que tome un papel más activo, informando a Washington». Frei no se decidió nunca a dar ese paso.

Al mismo tiempo, el general de brigada Camilo Valenzuela jefe de la guarnición de Santiago, había hecho contacto con el ex general Roberto Viaux Marambio, y le había encargado la tarea de hacer «un equipo de choque» compuesto por personas «de confianza y con espíritu de combate», a fin de iniciar en todo el país un plan de atentados terroristas. El grupo de Viaux se formó, apoyado por otro grupo encabezado por Enrique Schilling, secretario privado del senador radical reaccionario Julio Durán, y por un naciente grupo de jóvenes universitarios dirigidos por el abogado Pablo Rodríguez Grez, que fuera secretario-

abogado de la campaña presidencial de Jorge Alessandri Rodríguez.

Los terroristas, que comenzaron su labor en la segunda quincena de septiembre de 1970, contaron con la protección del general director de Carabineros, Vicente Huerta, y con la asesoría «técnica» de dos miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIM).

Todo estaba funcionando perfectamente en el esquema articulado la noche del domingo 6 de septiembre, excepto por dos detalles: el presidente Frei no colaboraba activamente, y el candidato triunfante Salvador Allende estaba estableciendo rápidamente contactos con representantes de las Fuerzas Armadas chilenas para «explicar su programa de Gobierno».

El embajador Edward Korry, de los Estados Unidos, se puso nervioso y comenzó a enviar recados a Eduardo Frei, sumamente insolentes, incluyendo la frase «díganle que se ponga los pantalones de una vez».

Por su parte, Salvador Allende comenzó a hacer saber a los generales de las Fuerzas Armadas (tuvo conversaciones con el general Manuel Torres de la Cruz, Herman Brady y René Schneider), que quienes se oponían a que fuera ratificado en el Congreso Nacional estaban cometiendo un error terrible, porque en la historia de Chile se había elegido al segundo en la votación por el Congreso Pleno. Porque «el millón de chilenos que me eligió» es un «destacamento de combate» que no aceptará tal decisión. Porque «mi programa» es un programa de «desarrollo del capitalismo de Estado » y no es socialista. Porque «las reformas» de mi «programa» son «la única salida pacífica que le queda a este sistema de vida para sobrevivir».⁹

Estas afirmaciones de Salvador Allende, por otro lado, habían sido repetidas a los dirigentes demócratacristianos que no estaban comprometidos en el golpe militar: Renán Fuentealba y Bernardo Leighton, de enorme peso sobre la opinión de los miembros de la Junta de ese partido. De allí surgió la idea de hacer firmar a Allende un Estatuto de Garantías Democráticas, para ser incorporadas a la Constitución chilena, que servirían como un certificado de conducta «no marxista» de Allende. El día 8 de octubre, ese Estatuto ya estaba redactado y aprobado tanto por la Democracia Cristiana como por la Unidad Popular, lo que aseguraba que, por lo menos una gran mayoría de parlamentarios demócratacristianos votarían el 24 de octubre por Salvador Allende, dándole los votos suficientes para ser elegido.

Pero, al mismo tiempo que en la primera semana de octubre las conversaciones de Allende con el PDC daban sus frutos, también fructificaban sus recados y conversaciones con los jefes de las Fuerzas Armadas. El general René Schneider había informado a la misión militar norteamericana en Santiago de todo lo que ocurría, y ésta, a su vez, al Pentágono. En el Pentágono se había evaluado la situación, y en los primeros días de octubre, la misión militar norteamericana informó a Schneider que «todo el plan queda cancelado». Se le explicó por qué, y Schneider, el día 15 de octubre, en la Academia Politécnica del Ejército, dio una charla sobre el tema, repitiendo las instrucciones que le habían dado los generales de Washington:¹⁰

1) No debemos actuar torpemente en un momento tan delicado de la vida constitucional chilena. Las Fuerzas Armadas no pueden ahora «detener la evolución y los cambios». Nuestro deber «es aceptarlos» para cuidar de que se desarrollen en orden y sin descarrilar la tranquilidad social.

2) El «pesimismo y la pérdida de fe» pueden llevar a equivocarnos, a creer que «el enemigo marxista está a las puertas» y cometer un error de «caer en extremos» para combatirlo.

3) Un grupo muy importante de chilenos, en estos momentos, «no está dispuesto a dejarse arrebatar un triunfo electoral que cree les cambiará el curso de sus vidas». Nuestro deber es permitir que esas personas intenten su experimento, pero sin causar daños a los demás. Sin causar daños a nuestra Patria, a nuestra vida institucional.

4) «El señor senador Salvador Allende nos ha dado seguridades» de que se mantendrá dentro de la Constitución y las leyes. De que sus «cambios programáticos» no representan un peligro para nuestro modo de vida occidental y cristiano. El señor senador me ha dicho personalmente algo en lo que estoy de acuerdo con él: en estos momentos, un Gobierno como el del señor Allende, es el único tipo de gobierno que puede impedir que estalle una insurrección popular violenta y trágica.

5) Las Fuerzas Armadas, que somos garantía de que esta sociedad siga siendo «occidental y cristiana», tenemos que «esperar y ver qué sucede en el futuro». El futuro nos dirá si tenemos que intervenir para volver a poner las cosas en su lugar, o si el señor senador Salvador Allende cumple su palabra de «encauzar» LA INQUIETUD popular y de «impedir la insurrección de los que nada tienen».

El Pentágono había dicho su palabra, y el comandante en

jefe del Ejército chileno se la había hecho saber a los altos mandos. También se la dió a conocer al director general de Carabineros, al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y al comandante en jefe de la Marina. Cuando éste, Jorge Porta Angulo, se lo hizo saber al cuerpo de almirantes, cuatro de ellos se entrevistaron con el senador Salvador Allende, para preguntarle si era cierto lo que se decía en las Fuerzas Armadas acerca de su pensamiento político. Allende reafirmó todos los conceptos vertidos por Schneider. El almirante Porta Angulo renunció a su comandancia en jefe, y fue reemplazado por el jefe de la Primera Zona Naval (Valparaíso), vicealmirante Hugo Barrios Tirado.

En suma, lo que había ocurrido fue que en la primera semana de octubre de 1970, el Pentágono había dicho NO al golpe militar en Chile, y los generales chilenos tenían el encargo de desarmar la maquinaria golpista ya en marcha. La decisión del Pentágono causó un tremendo impacto en la CIA, que confiaba en seguir adelante de todas maneras. Esta falta de coordinación entre el Pentágono, el propio presidente Nixon y la CIA, provocaría una trizadura en el equipo conspirativo, que quedaría reducido al grupo de choque del general Roberto Viaux.

En los mensajes de Robert Berrellez y Hal Hendrix a la vicepresidencia de la ITT en Nueva York, a partir de septiembre de 1970, es notorio este problema de descoordinación con el Pentágono. Por ejemplo, en un documento fechado en Santiago de Chile el 18 de septiembre, y dirigido a Edward Guerrity, vicepresidente de la ITT en Nueva York, Hal Hendrix le comunica: «El martes en la noche (15 de septiembre), el embajador Edward Korry finalmente recibió un mensaje del Departamento de Estado, dándole luz verde para actuar en nombre del presidente Nixon. El mensaje le dio la máxima autoridad para hacer todo lo posible —menos una acción tipo República Dominicana— para impedir que Allende tome el poder». El mismo informe agregaba que «debemos hacer cuanta presión podamos sobre el USIS (United States Information Service) en Washington para que dé instrucciones a la USIS de Santiago de que comience a mover los editoriales de «El Mercurio» alrededor de América Latina y hacia Europa».

El informe agregaba que «Arturo Matte Larrain cree» que Eduardo Frei todavía no se decide, que «hay que darle la presión adecuada» y que se «formará un equipo de periodistas» de «El Mercurio» para «crear buena imagen» para el golpe. (Cita-

do de los documentos puestos a disposición de la comisión investigadora del Senado norteamericano sobre la ITT, en 1972, por el periodista Jack Anderson).

Es decir, el 15 de septiembre, Nixon aparecía dando «luz verde» para la conspiración, en circunstancias que el Pentágono todavía estaba «evaluando la situación» y no había decidido aún qué partido tomar.

El 30 de septiembre, Guerrity comunica al vicepresidente de la ITT chilena (Benjamín Holmes), que Jack Guilifoye, vicepresidente en Nueva York de la ITT, había sostenido una «entrevista importante sobre el tema» con William Broe, director general de la CIA para América Latina.

El 9 de octubre, ya quedaba claro que la ITT en Washington, que Nixon había «echado pie atrás» a su «decidida actitud de luz verde» del mes de septiembre, y el vicepresidente de la ITT en Washington, William Merriam, remitía un informe a John McCone, ex director general de la CIA y ahora miembro del equipo ejecutivo de la ITT, en el que ironizaba diciendo que está «bastante sorprendido» de saber que la Administración Nixon está dispuesta a tomar una actitud dura «si Allende es elegido», y comentaba «ésta es la primera cosa comfortable que he oído».

A estas alturas, el Pentágono ya había hecho conocer su opinión a Nixon, y había ordenado a su hombre en Santiago, Schneider, que desmontara el golpe. Sin embargo, la ITT insistía, y desde Santiago, Hal Hendrix, director de relaciones públicas de la ITT para América Latina (y agente de la CIA), transmitía a Edward Guerrity, el 16 de octubre, lo siguiente:

«Las posibilidades de un golpe de Estado son magras pero existen... Una figura clave de esa posibilidad es la del general de brigada en retiro Roberto Viaux Marambio». Pero advertía: «Es un hecho que la semana pasada Washington dio instrucciones a Viaux de echarse atrás. Se tenía la impresión de que no estaba suficientemente preparado... Al parecer, algunos emisarios le advirtieron a Viaux que si se movía prematuramente, su golpe sería comparable a una Bahía de Cochinos en Chile.»

Hendrix no estaba contando todo a Guerrity. Ocurre que el día 3 de octubre, el otro agente de la CIA, y coequipo de Hendrix, Robert Berrellez, se había reunido con Roberto Viaux y su suegro Raúl Igualt en el Country Club de Santiago, para examinar la «noticia» de que Washington quería que Viaux cancelara el

golpe. Viaux contó a Berrellez que había recibido un informe de parte del general Schneider, en que se daba por cancelado todo el plan. Berrellez fue de opinión de que «hay traición» en alguna parte y convenció a Viaux de que siguiera adelante con el plan. Éste le comunicó que tenía pensado un autosequestro del comandante en jefe René Schneider, para provocar dos o tres días de tensión, y después derrocar a Frei y nombrar una Junta Militar de la que el general Camilo Valenzuela sería el jefe. Berrellez estuvo de acuerdo en cumplir con el «autosequestro», pero ahora como secuestro verdadero. También Berrellez había informado a Hendrix que Viaux se mostró furioso con Schneider y que estuvo de acuerdo en que, de haber «un traidor», ése tenía que ser el comandante en jefe del Ejército.

El día 20 de octubre, cuando ya el general Schneider había desmontado todo el dispositivo militar activo para el golpe vetado por el Pentágono, Hal Hendrix comunicaba a sus jefes en Nueva York:

«Hay una resignación general de que Allende gane fácilmente en el Congreso... A pesar de lo antes mencionado, queda en Chile un débil susurro de esperanza de que se monte un golpe militar para impedir que Allende llegue a la presidencia... Cierta personal militar continúa esperando que el ex general Viaux encabece una acción militar contra el especulador que no cumple sus compromisos, el presidente Eduardo Frei, antes del 4 de noviembre, para colocar las Fuerzas Armadas en el poder y así impedir que Allende lo asuma.»

Ese mismo día, el grupo dirigido por el ex general Viaux preparaba los últimos detalles para lanzarse en la aventura y utilizar al «traidor Schneider» como elemento detonante de la bomba para el «caos social» y el golpe militar. En la mañana del día 22, el ex general Viaux mandó a un equipo de su grupo a «liquidar al traidor», y el general René Schneider, comandante en jefe del Ejército chileno, era acribillado a balazos en el interior de su automóvil Mercedes Benz. Agonizante, muere tres días después, cuando el Congreso Pleno había elegido Presidente a Salvador Allende.

El 25 de octubre, Hendrix informaba a Nueva York: «Contra lo que todos esperaban, los militares no se movieron contra Allende el fin de semana. Se creía que el atentado era el preludio del golpe».

Es que el Pentágono había dicho a los generales chilenos que NO SE MOVIERAN, y éstos no se movieron aun cuando

les asesinaron a su comandante en jefe, el cual, por cumplir las órdenes de Washington, había arriesgado su vida.

Allende se convirtió en Presidente de la República y estuvo de acuerdo con el sucesor de Schneider, general Carlos Prats González, en «investigar el crimen del general Schneider de modo de no provocar *un quiebre* en las Fuerzas Armadas». En otras palabras, no investigar las verdaderas causas del crimen de Schneider, el verdadero grado de complicidad de los generales chilenos con el golpe y con el Pentágono, y la real participación de Eduardo Frei y su grupo de ministros en el complot. Prats garantizaba a Allende la «lealtad» del Ejército, si Allende garantizaba a Prats no obligarlo a investigar. Fue el primer acuerdo «peligroso» que Allende tuvo con los generales chilenos, y que lo fueron colocando dentro de la línea de fuego de su poder real.¹¹

Las Fuerzas Armadas acordaron sacrificar a Vicente Huer-ta Celis, general director de Carabineros, al almirante Hugo Barrios Tirado, comandante en jefe de la Marina, y a Carlos Guerraty, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Los sustitutos fueron: el general José María Sepúlveda Galindo, en Carabineros; César Ruiz Danyau, en la Fuerza Aérea, y el almirante Raúl Montero, en la Marina. Todos ellos, junto con Carlos Prats, exigieron a Allende que no «removiera» generales (como era habitual cada vez que se cambiaba Presidente de la República), para «cuidar la estabilidad y la cohesión institucional». Allende, una vez más, aceptó.

Pero, aprovechándose del hecho que los militares no permitirían que se descubriera la verdad, Allende, desde ese momento, utilizó el asesinato del general Schneider como la supuesta demostración de que «por sobre todas las cosas, las Fuerzas Armadas chilenas son profesionales y respetuosas de la Constitución y las leyes». Allende, así, convirtió a Schneider en un símbolo de la «lealtad de la Patria». Y lo hizo a tal grado, que pronto, al menos por los hechos posteriores, se autoconvenció de ello, y perdió fatalmente de vista la verdad de que Schneider había obedecido órdenes del Pentágono hasta su muerte, y que la maquinaria que el Pentágono tenía en las Fuerzas Armadas chilenas estaba intacta, y él había estado de acuerdo en dejarla intacta siendo, como lo era, una maquinaria de muerte apuntada hacia su propio pecho.

¿Y ahora qué?

El baleo y posterior muerte del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, fue traumatizante para la generalidad de los mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Los mandos de nivel medio y superior, que no conocían el verdadero argumento de la trama golpista en que se había enredado Schneider, analizaron el suceso con la simpleza de un campesino: el general fue asesinado por la inepticia de los políticos.

La imagen del general en retiro, Roberto Viaux, que hasta octubre representaba «el renacimiento del ejército» para muchos mandos, estalló como una pompa de jabón, pero, una vez más, la razón dada fue: Viaux se corrompió al tomar contacto con los políticos.

En suma, dentro de la oficialidad del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, el comienzo del período presidencial de Allende coincide con un violento sentimiento de odio y desprecio a los civiles, que llegó a tomar la forma, en algunas asambleas improvisadas en el Club Militar de Santiago (curiosamente ubicado al lado de la Embajada de Brasil) de «¿y qué pasa si les quitamos pan y pedazo a estos payasos, y nos quedamos con todo?». La pregunta, con el correr de los días tomó el camino de la reflexión y los contornos de una contrapregunta: «¿Estamos los militares preparados para hacernos cargo de todo?»

De improviso, para un observador externo, quedaba justificada la aparentemente inocua tarea emprendida por el Pentágono a partir de 1964 en las Fuerzas Armadas chilenas, al introducir en el estudio para los alumnos de las Academias de altos mandos, las cátedras de economía, política, desarrollo industrial, reforma agraria, etc. Quedaba justificada como la etapa de preparación de unas Fuerzas Armadas en un país colonizado; para afrontar con alguna posibilidad de éxito un momento de crisis del sistema de colonización. En Chile, a comienzos de 1971 se estaban gestando ese mismo par de circunstancias.

En ese momento, en el Ejército principalmente, comenzaron a tener importancia los «cabeza de huevo», es decir, un grupo de generales, coroneles, tenientes coroneles y mayores que en la Academia de Guerra se venían preocupando desde 1970, intensamente, de «la realidad nacional» y sus «problemas». Estaban asesorados directamente por el Pentágono, a través de la misión

militar de los Estados Unidos en Santiago, la cual los guiaba en el estudio de economía superior, macrosociología y micro-sociología y temas conexos.

Los «cabeza de huevo» tenían un brillante exponente, en 1970, en el mayor Claudio López Silva. Este graduado de sociólogo, planteó una tesis que se llamó *Las Fuerzas Armadas en el Tercer Mundo*, y que fue publicada internamente en el «Memorial del Ejército de Chile», número 356, por recomendación del director de ese boletín interno, general Pablo Schaffhauser, que al año siguiente sería jefe del Estado Mayor. La tesis planteada por el mayor Claudio López Silva podría resumirse en las siguientes ideas:

1) En el tercer mundo existe una fuerte tendencia a que los militares participen en política.

2) Las Fuerzas Armadas del tercer mundo son la única organización social coherente, capacitada y eficaz para enfrentarse a los problemas socio-económicos de los países subdesarrollados (esta es, por supuesto, la misma tesis planteada por Nelson Rockefeller, en 1969, en su informe sobre los países de América Latina).

3) El «comunismo» es un enemigo real, pero «en innumerables ocasiones» los pequeños grupos de «oligarcas» que dominan una sociedad se valen del «fantasma del comunismo» para hacer intervenir a los militares en política, empujarlos a que derroquen Gobiernos, y servirse de ellos para recuperar sus posiciones de explotación.

4) La causa principal de la inquietud política en América Latina es la pobreza. Y la pobreza se produce por un reparto injusto de la riqueza. Si se hace un reparto equitativo de esa riqueza, entonces «no existirá subversión».

5) Estados Unidos tiene el deber de impedir la subversión en América Latina, ayudando en los programas de desarrollo.

6) La única forma correcta de enfrentarse al comunismo es realizando reformas en los sectores agrario, bancario e industrial, para hacer justicia «al obrero y al empresario».

7) Sólo las Fuerzas Armadas se han demostrado capaces de hacer cambios en las sociedades del tercer mundo sin que ello signifiquen un «caos social».

8) Las Fuerzas Armadas, en América Latina, son la única organización coherente que puede mantener a esos países en «el bloque occidental de naciones».

9) El problema del desarrollo económico de cada pueblo ha

dejado de ser un problema de los políticos o de los grupos civiles. Es un problema básicamente de «soberanía nacional», que atañe primordialmente a las Fuerzas Armadas de ese país. Un país débil tiene un aparato militar débil. Un país económicamente fuerte tiene Fuerzas Armadas fuertes. Por eso, cuando los políticos civiles son incapaces de desarrollar la economía de un país, los militares deben intervenir para impedir que la soberanía nacional esté en peligro.

10) «La Constitución y las leyes» no son «entes sociales inalterables», sino estructuras legislativas que pueden cambiarse, adecuarse o «destruirse», según sean las conveniencias de una nación para mantener su seguridad y su soberanía interna y externa.

Basados en esta especie de «decálogo», los «cabeza de huevo» planteaban la tesis, a fines de 1970, que la estructura económica, política y social de Chile estaba en crisis, una crisis profunda de la que, como «nación occidental», sólo se podía salvar si las Fuerzas Armadas, como organización «política y armada» se hacían cargo de la conducción de la sociedad entera.

El general Herman Brady Roche y los coroneles Washington Carrasco y Mario Sepúlveda Squella, todos ellos figuras eminentes del Servicio de Inteligencia Militar, eran una especie de «líderes intelectuales» del movimiento de los «cabeza de huevo» que planteaban una «explicación del fenómeno Allende», tan novedosa para el resto de los generales y altos mandos, que durante 1971 se discutió con minuciosidad en las tres ramas de las Fuerzas Armadas chilenas.

La interpretación decía que «Allende no es un peligro para el tipo de sociedad que nosotros, las Fuerzas Armadas, queremos». «Al revés, Allende es una seguridad para este momento crítico». Y argumentaban así: el nuevo Presidente de la República sabe que continuará en el cargo solamente si hace respetar la Constitución actual. En cambio, sus enemigos políticos harán todo lo posible por destruir la actual Constitución, ya que se mostró incapaz de impedir el triunfo de una agrupación izquierdista del tipo de la de Allende. Ahora bien, ¿qué necesitamos las Fuerzas Armadas en este momento? Necesitamos sólo una cosa, y en gran cantidad: TIEMPO. ¿Tiempo para qué? Tiempo para prepararnos, para adiestrar a nuestros cuadros para el momento en que tengamos que hacernos cargo de todo el aparato de la sociedad. Ese tiempo nos lo da el presidente Allende, el cual, cuidando de no salirse de la Constitución, y cuidando de

no ponernos a nosotros en su contra, nos permitirá participar en la Administración del Estado, tratará de desarmar el intento del populacho por organizarse, intentará desarmar políticamente los intentos golpistas de la derecha sin recurrir a la «insurrección popular», y con ello irá haciendo madurar adecuadamente las condiciones para que las Fuerzas Armadas, en el momento oportuno, entren en escena y funden «un nuevo orden social, sin políticos, sin odios de clases» y «ponga en cintura tanto a los patrones como a los obreros».

Basados en este pensamiento general, los «cabeza de huevo» nucleados en torno a Brady, Carrasco y Sepúlveda, señalaban a sus incrédulos compañeros que «tenemos que acercarnos a Allende, tenemos que convivir con sus políticos, tenemos que participar en sus reuniones». Y agregaban: tenemos que demostrarles que somos «allendistas», y ellos, desesperados como están por la falta de maniobrabilidad que tienen para sus planes de nacionalizaciones y expropiaciones, se aferrarán a estos «allendistas», los acercarán al aparato administrativo y los irán transformando en su verdadera base frente a la embestida de los latifundistas y monopolistas «recalcitrantes», así como frente a la embestida del populacho que tratará de empujarlos cada vez más a una situación que se parezca a la bolchevique en 1917. Todo ello nos dejará en situación inmejorable para intervenir con buenas perspectivas de éxito cuando sea necesario.

Los «cabeza de huevo» ganaron la adhesión de los demás grupos de altos mandos cuando plantearon claramente que «nuestro enemigo fundamental es el comunismo», «nuestra tarea fundamental es impedir que el comunismo, montado en la insurrección del populacho, se adueñe de Chile». Pero, «en este momento», con Allende en la Presidencia, «el comunismo no está a las puertas del cuartel», «está muy lejos todavía, existe el peligro de que después, más tarde, con el desarrollo de los acontecimientos, ni siquiera Allende pueda conjurar el peligro comunista. «En ese momento, tendremos que intervenir; no antes.»

Durante los años 1971, 1972 y 1973, los generales Herman Brady Roche, Orlando Urbina Herrera, Guillermo Pickering, Pedro Palacios Cameron (quien fue nombrado ministro de Minería en la primera crisis de Gabinete de Allende), Rolando González Martins, César Raúl Benavides, y los coroneles (después generales) Washington Carrasco, Mario Sepúlveda Squella y Sergio Arellano Stark (actual jefe de la guarnición de San-

tiago y de la Segunda División), fueron considerados por el propio Salvador Allende y por sus colaboradores más cercanos como «hombres leales», e incluso, en el caso de Herman Brady, como «marxistas». Este trabajo de engaño de los «cabeza de huevo» de la Academia de Guerra y del Servicio de Inteligencia, no cabe duda, ha sido uno de los puntos más altos de inteligencia mostrados por los altos mandos militares en Chile en los últimos años.

Es conveniente tener en cuenta que cuando el canciller Clodomiro Almeyda, del partido socialista, viajó a La Habana en julio de 1971, lo acompañó en su reducida comitiva el coronel Washington Carrasco, el cual se ganó, en el viaje, las simpatías del canciller y de sus asesores políticos como «progresista» y una «promesa» como revolucionario. El 11 de septiembre de 1973, Carrasco, ya ascendido a general, era el jefe de la Tercera División, con asiento en la industrial ciudad de Concepción. Allí tuvo el récord de haber asesinado (o fusilado) en sólo tres horas, desde las cinco a las ocho de la madrugada del día 11, a 250 dirigentes sindicales obreros y campesinos. A la semana siguiente, por supuesto, como en todo el país, esa cifra ya se había más que cuadruplicado.

Este grupo de generales y coroneles, a través del senador Alberto Jerez, del Movimiento de Acción Popular Unitaria (y más tarde la de Izquierda Cristiana), miembro de la Comisión de Defensa del Senado y una especie de «coordinador» entre Salvador Allende y los generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, convenció al nuevo Presidente chileno de la bondad de la teoría de «las fronteras económicas», cuya síntesis era la siguiente. Las Fuerzas Armadas son garantes no sólo de las fronteras físicas de una nación sino también de sus «fronteras económicas», es decir, son responsables del desarrollo económico.

Ya el 4 de noviembre de 1971, en el Estadio Nacional, el presidente Allende, en su discurso de aniversario del primer año de Gobierno, al rendir homenaje a la «lealtad y disciplina de las Fuerzas Armadas y Carabineros», planteó públicamente la teoría: «Destaco la forma en que ellos se han incorporado al proceso de defender nuestras fronteras económicas y su presencia en el acero, en el hierro, en el cobre, en la Comisión de Energía Nuclear. Ello coloca a Chile como un ejemplo que envidian muchos países del mundo».

En ese momento, altos mandos militares en servicio acti-

vo habían sido colocados por Allende en 265 cargos importantes del aparato económico nacional, incluyendo la Corporación de Fomento de la Producción y la Oficina de Planificación Nacional, los centros motores del desarrollo económico chileno. Representantes en servicio activo de la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, eran miembros de los directorios de las nacionalizadas minas de cobre de Chuquibambilla, El Salvador y El Teniente.

Pero los «cabeza de huevo» no se limitaron a llevar adelante su táctica de «prepararse para gobernar en el momento oportuno», solamente consiguiendo que Allende aprobara y pusiera en práctica la teoría de las «fronteras económicas». También agregaron la componente de «inteligencia» de esta preparación: colocaron en organismos claves de la administración económica del país a decenas de miembros del Servicio de Inteligencia Militar, de la Fuerza Aérea y de la Marina como «civiles». Es decir, sin que la administración de la Unidad Popular se diera cuenta que esos funcionarios pertenecían a los organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Uno de los casos más notables de esta «infiltración» en el aparato técnico-administrativo de la Unidad Popular, lo fue la Corporación de Fomento. La revista chilena reaccionaria «Qué pasa», en su edición del 2 de noviembre de 1973, después del derrocamiento de Allende, al iniciar una crónica sobre la CORFO, entrevistando a su nuevo vicepresidente, el general de brigada Sergio Nuño Bawden (quien fuera nombrado por el propio Allende, en 1971, gerente de una fábrica de explosivos filial de la CORFO), escribe la siguiente confidencia de éste:

«Todo este mundo complejo atrajo oportunamente la atención del Servicio de Inteligencia Militar y CORFO pasó a ser considerada un tema «clave». Esto se tradujo en curiosas anécdotas: el ex Secretario General de la institución, cuando se presentó voluntariamente después del 11 de septiembre al Ministerio de Defensa, se encontró con que un modesto funcionario administrativo que dos años antes había contratado, estaba allí como miembro del Ejército. Muchos fueron los empleados que luego del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas se llevaron sorpresas al ver ex compañeros vistiendo de uniforme».

Esta infiltración militar en el aparato civil, planificada específicamente, según definición de los «cabeza de huevo», para «darnos un adiestramiento que nos permita manejar el país», no se hizo solamente a nivel de la estructura económica del

Estado. También se movilizó a nivel de la estructura política, colocando algunos de sus cuadros en cada uno de los partidos políticos de la Unidad Popular, en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Partido Comunista Revolucionario, en las organizaciones de periodistas de izquierda y en las organizaciones sindicales tanto de obreros, campesinos como empleados.

Así y todo, tal como lo habían previsto los analistas de los «cabeza de huevo» en sus discusiones de fines de 1970 para calmar a los demás altos mandos que se desesperaban por la presencia de Allende en La Moneda, el Gobierno de la Unidad Popular siguió integrando a esos altos mandos al aparato administrativo en lo que pareció ser una carrera desesperada por mantener «neutralizadas» a las Fuerzas Armadas.

Ya en mayo de 1973, cuando la conspiración militar era voz pública, el presidente Allende insistía en los viejos planteamientos de 1971, y en su mensaje anual al Parlamento, el día 21 de ese mes, leía lo siguiente:

«En una sociedad moderna, como la concebimos, las Fuerzas Armadas deben estar integradas plenamente. Deseo expresar la satisfacción del país por su desempeño, al igual que el de Carabineros e Investigaciones, en el cumplimiento de sus patrióticas tareas.

»Las primeras, además de cumplir su *rol* habitual, integraron junto a los representantes de los partidos populares y la Central Unica de Trabajadores, el Gabinete que designará para poner término al paro subversivo de octubre.

»Ha sido preocupación permanente del Gobierno impulsar y dar satisfacción a los planes de desarrollo de las tres ramas de las Fuerzas Armadas para afianzar, aún más, el estricto cumplimiento de las tareas específicas que a ellas les encomienda la Defensa Nacional. Es así como, durante el año 1972, se promulgaron leyes destinadas a aumentar las plantas del Ejército y la Fuerza Aérea y se encuentra sometido a la aprobación del Congreso un proyecto que persigue el mismo fin para la Armada Nacional. A lo que debe agregarse el apoyo económico para el mejoramiento y ampliación de sus infraestructuras, así como para la renovación del material bélico y logístico.

»Esta política será continuada en respaldo del desarrollo económico, pues la seguridad y el desarrollo exigen una conjugación armónica cuyo desequilibrio sólo puede traer consecuencias negativas para el país. Razón por la cual el Gobierno HA PUESTO ESPECIAL ÉNFASIS en la participación de las Fuer-

zas Armadas en los programas socioeconómicos... El Gobierno continuará impulsando esta participación, que permite a Chile contar con un potencial humano de ALTA PREPARACIÓN MORAL E INTELECTUAL.»

Resulta chocante pensar que, en los mismos momentos en que Allende pronunciaba estas palabras, en Valparaíso los altos mandos del Cuerpo de Infantería de Marina adiestraban y proveían de material explosivo a dos grupos civiles (Patria y Libertad y Comandos de Ex Cadetes) para sus tareas de terrorismo «de apoyo» a un «paro general de actividades empresariales» que se proyectaba desencadenar en los «próximos sesenta días». En el mismo instante que Allende decía esto, en la Academia de Guerra del Ejército, en Santiago, los generales Sergio Arellano Stark, Javier Palacios Ruhman, César Raúl Benavides, Ernesto Baeza Michelsen y Herman Brady Roche, discutían «un plan general tentativo» para invadir Santiago, reducir los cordones industriales, paralizar la capacidad de movimiento de las organizaciones sindicales de la Unidad Popular, y atacar y rendir el Palacio de Gobierno. En ese mismo momento, en el Estado Mayor de la Armada, el jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso, vicealmirante José Toribio Merino, planteaba su famoso plan «de los tres tercios», que significaba «fusilar unos tres mil activistas responsables, encarcelar otros tres mil, y exiliar a tres mil dirigentes políticos de todas las tendencias» para «pacificar el país» y restablecer el orden. Para crear un Gobierno «de las Fuerzas Armadas».

Los duros

Pero aun cuando los «cabeza de huevo» de la Academia de Guerra y del Servicio de Inteligencia Militar del Ejército se convirtieron en los «líderes intelectuales», no constituían la fuerza mayoritaria dentro de los altos mandos. Su poder residía, más que en el número, en su estrecho contacto con el Pentágono y su centro intelectual en Washington, la American University. Y ese contacto estrecho les había permitido, desde fines de 1970, construir una especie de *memorándum* con respecto a las líneas principales del Programa de Gobierno de la Unidad Popular, que sirvió para aglutinar a los diversos sectores políticos dentro de los mandos militares en torno a una «línea de conducta» cuyo esquema ya trazamos en las páginas anteriores.

Los puntos principales de ese *memorándum* eran los siguientes:

1) Las Fuerzas Armadas consideran «justo» que las riquezas básicas del país estén en manos del Estado chileno, porque eso fortifica la economía nacional y, de paso, fortifica la capacidad de equipamiento de las Fuerzas Armadas.

(Este pensamiento llegó a un clímax agudizado en julio de 1972, cuando el general Carlos Prats, por encargo de su cuerpo de generales, planteó a Salvador Allende que «la administración de las compañías nacionalizadas del cobre debería estar principalmente en manos de técnicos militares, por considerarse una industria estratégica», y que «de las entradas provenientes de la venta del cobre se debería estudiar un financiamiento autónomo para las Fuerzas Armadas». Ello, en los hechos, significaba que los militares chilenos quedarían como entidad al margen del Parlamento para su financiamiento, lo que los habría convertido en un Poder dentro de otro Poder. Allende, en aquella época, encontró «razonable la idea», pero no tuvo tiempo, al parecer, para volver sobre el tema.)

2) Las Fuerzas Armadas están de acuerdo con la nacionalización de las minas de cobre, pero, al mismo tiempo, también están de acuerdo en que «a las empresas norteamericanas que las explotaron se les pague una indemnización razonable». (El 4 de noviembre de 1971, Salvador Allende puso énfasis en este aspecto, en su discurso de primer aniversario, cuando la «presión militar» pro «indemnización para la Anaconda y la Kennecott» era muy fuerte, después de ser nacionalizadas las miras en julio de ese mismo año. Dijo Allende: «Cuatro cifras para recordar al pueblo. Las compañías invirtieron a lo sumo 30 millones de dólares. En 50 años se han llevado 4.500 millones de dólares. A dos compañías hasta ahora, y si no resuelve en contra el Tribunal Especial, se les va a pagar indemnización, y si no resuelve otra cosa el Tribunal, no les pagaremos indemnización a la Anaconda, a la Kennecott ni al Salvador, pero las deudas que tienen las compañías son de 736 millones de dólares y lógicamente es previsible que tendremos que hacernos cargo de ellas. Por lo tanto, ESTAMOS PAGANDO UNA INDEMNIZACION INDIRECTA de 736 millones de dólares a las compañías del cobre que se llevaron en 50 años 4.500 millones de dólares». Este argumento, real y contundente, bajó la presión militar sobre el tema. Pero de todos modos hizo subir la deuda externa de Chile, de un golpe, de más de 3.000 millones de

dólares a más de 4.000, lo cual puso a la economía chilena todavía más en manos de los consorcios financieros norteamericanos.)

3) Las Fuerzas Armadas consideran necesario que se haga una reforma agraria que permita el desarrollo capitalista del campo, liquidando parte del poder de los latifundistas sobre la sociedad chilena. Esta reforma agraria debe servir de apoyo a la industrialización del país, como nuevo mercado y como productora de materias primas industriales.

(Esta tesis, sacada de la Alianza para el Progreso, del asesinado presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, que ya había provocado la ira de los latifundistas con la política agraria del Gobierno de Eduardo Frei, provocó una campaña iracunda de sus organizaciones contra los generales chilenos, a quienes acusaban de «gallinas», por permitir que Allen-
de gobernara).

4) Las Fuerzas Armadas estiman que es «justo» que las instituciones de crédito (bancos) nacionales estén controlados o en manos del Estado chileno, para «ordenar» mejor el «crecimiento económico democrático» del país, el cual históricamente ha sido entrabado por los intereses particulares de algunos sectores poderosos de la empresa privada monopólica. Los cuales, con su actitud «recalcitrante», han puesto o están poniendo en peligro «la estabilidad de todo el sistema económico y social» en que se basa la sociedad chilena.

5) Las Fuerzas Armadas estiman necesario que los consorcios norteamericanos de la banca, la industria y el comercio («los más adelantados del mundo y los más eficientes»), participen, bajo un «reglamento claro y preciso que resguarde nuestra soberanía nacional», en el desarrollo industrial chileno y en la capacidad de capitalización de la economía nacional, porque «sin ese capital y tecnología de los Estados Unidos, NO PODREMOS SALIR DEL SUBDESARROLLO».

(En mayo de 1971, en la reunión en Lima de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, el ministro de Hacienda de Chile y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista chileno, Américo Zorrilla, planteaba la misma tesis, diciendo: «En el marco del proceso revolucionario chileno, desempeñan su *rol* tanto el financiamiento externo como las inversiones de capitales extranjeros... orientados hacia los fines prioritarios que señalen las necesidades de nuestra economía... Para estas inversiones extranjeras está abierto el an-

cho campo de las áreas mixta y de propiedad privada, previo el acuerdo con el Estado que asegure tanto los legítimos intereses de aquéllas, como su debida orientación en beneficio del desarrollo del país». Tanto la tesis militar chilena como las palabras del ministro de Hacienda, tenían coherencia con el planteamiento del *Informe sobre América Latina*, de Nelson Rockefeller, en el que se decía: «Creemos que Estados Unidos debe encaminarse cada vez más hacia una relación de AUTÉNTICA ASOCIACIÓN» en sociedades mixtas con los latinoamericanos, en las cuales «la inversión privada extranjera pueda proveer conocimientos técnicos esenciales y capital».)

6) Las Fuerzas Armadas creen que todos estos cambios deben hacerse dentro de «nuestro sistema institucional, con respecto a la democracia formal y en solidaridad con el bloque occidental de naciones».

Sobre estos seis puntos planteados por los «cabeza de huevo» (que de aquí en adelante llamaremos generales «reformistas», para diferenciarlos de los otros grupos de generales que definiremos enseguida), los altos mandos militares consiguieron un criterio uniforme para afrontar el «fenómeno» que representaba la Unidad Popular. Sobre estos mismos puntos, el presidente Allende y parte de las directivas de la Unidad Popular consiguieron una especie de «entendimiento cordial» con las Fuerzas Armadas, y éstas, a su vez, influyeron en las directivas de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. Incluso las agrupaciones empresariales monopólicas privadas, como la Sociedad de Fomento Fabril y la Sociedad Nacional de Agricultura, aceptaron el criterio de «esperar y ver» de los generales «reformistas» y del Pentágono, bajo la línea general de que «Allende nos puede servir para apagar el incendio».

Un incidente ocurrido en agosto de 1971 señala cómo, durante los primeros nueve meses de ese año, el Gobierno de la Unidad Popular, reducido su programa a lo que las Fuerzas Armadas y el Pentágono querían, tenía el apoyo condicionado incluso de sus enemigos políticos. En aquella fecha, el Eximbank, organismo financiero del Gobierno de los Estados Unidos, cediendo a las presiones de la Anaconda y la Kennecott, negó a Chile un préstamo de 21 millones de dólares para compra de aviones Boeing de pasajeros para la Línea Aérea Nacional (LAN), con el fin de «presionar por indemnización para las empresas del cobre».

El diario «El Mercurio» del día 17 de agosto de ese año, al

comentar esta medida del Eximbank, escribía: «Esta política norteamericana hace peligrar las relaciones interamericanas y constituye la repetición de antiguos errores históricos que se suponían comprendidos».

El propio Partido Nacional, expresión política de la oligarquía agrícola, industrial y comercial, el 16 de agosto emitía una declaración de airada protesta: «Actitudes y declaraciones como las que señalamos sólo contribuyen a entorpecer las relaciones internacionales y a dificultar la solución de los problemas» y «demuestran una lamentable falta de tino y de conocimiento de la realidad chilena».

Sin embargo, fue el diario oficial de la Democracia Cristiana «La Prensa», en su página editorial del 16 de agosto de 1971, la publicación que más claramente planteó el problema:

«La decisión de la que aparece como responsable el presidente del Eximbank tiene toda la torpeza de una provocación... Así el Gobierno norteamericano aparece una vez más, y prematuramente, identificado con intereses privados, olvidando un interés político superior... No es un misterio para nadie —y las misiones de vario orden que tiene Estados Unidos en Chile deben haberlo informado así a su Gobierno— que en el (Gobierno) de nuestro país, por el momento al menos, coexisten dos tendencias. Hay la de un sector que desea conducir la revolución chilena dentro del respeto a la Constitución, sin violencia en el plano interno y sin crisis internacional. Hay otro sector que desea provocar una ruptura violenta que, necesariamente, ha de proyectarse también en el plano internacional. Son éstos los que piden o anuncian, de partida, que las empresas expropiadas no deben ser indemnizadas... El Eximbank ha comenzado a hacerle el juego a esta tendencia, que no quiere nada más que provocar, precisamente, tales reacciones... En pocas ocasiones, si las hay, SE HA OPERADO EN AMÉRICA LATINA UNA NACIONALIZACIÓN CON MÁS FORMALIDAD LEGAL —y hasta constitucional— Y MÁS GARANTÍAS PARA LAS EMPRESAS NORTEAMERICANAS AFECTADAS».

En verdad, los representantes políticos de la oligarquía agrícola (ya en decadencia a partir de Frei en 1967 con la reforma agraria), comercial, financiera e industrial chilena, sabían perfectamente de qué estaban hablando cuando, en agosto de 1971, reprochaban al gobierno de Nixon haberse dejado llevar por las presiones de los consorcios Anaconda y Kennecott. La propia organización de la oligarquía industrial chilena, Sociedad de

Fomento Fabril, el mismo 16 de agosto, escribió una airada carta al presidente del Eximbank, en la cual le explicaba que «Chile vive un proceso de profundas transformaciones económico-sociales que afectan radicalmente su estructura económica y, en consecuencia, la situación de sus empresarios. Frente a él, nuestra institución gremial— la más antigua de las Américas— se encuentra empeñada en MINIMIZAR EL COSTO ECONÓMICO DE LAS TRANSFORMACIONES QUE SE VIVEN y en garantizar plenamente que él se desenvuelva en un marco de libertad y democracia y con pleno respeto a las garantías fundamentales». Por eso, frente a la negativa de préstamos por parte del Eximbank, «como empresarios privados y sobre todo por respeto a nuestra noble tradición democrática, no podemos aceptar que se subordinen resoluciones de esta índole, condicionándolas a decisiones que pueda adoptar nuestro Gobierno dentro del régimen jurídico que democráticamente se ha dado al país». Seguidamente, la Sociedad de Fomento Fabril le pide al Eximbank que revoque la postergación del préstamo a LAN-Chile.

Fuerza y debilidad

Cuando el Pentágono decidió en octubre de 1970 dar luz verde a la «experiencia de Allende» para «esperar y ver» si se le podía manejar como «bombero del incendio popular», los generales «reformistas» estuvieron de acuerdo y, en consultas con los sectores industriales y comerciales chilenos, estimaron que, si no se asfixiaba desde el exterior el experimento, «este puede resultar» y «la reforma de las estructuras hacia un capitalismo de Estado más sólido» puede «calmar la insurrección popular».

El Gobierno de Allende había iniciado una política de «reactivación económica» para 1971, que se basaba fundamentalmente en la utilización de toda la capacidad productiva y en el aumento de la demanda interna por medio de sustanciales reajustes de sueldos y salarios bajos, con un control de precios que, en una estructura monopólica como la chilena, afectaba en realidad menos a la oligarquía que a las empresas medianas y pequeñas. Esta reactivación económica hizo que en 1971, los índices de crecimiento económico del país llegaran a 8,3 %, lo cual constituía un récord. Pero, ese era el tope de la reactivación. Si en ese momento no había acumulación de capital, el sistema se

desmoronaría y, al desmoronarse, la enorme presión popular podría desbordarse más allá de los límites «razonables» establecidos por los dueños de Chile.

Por otra parte, la presión de los generales «reformistas» sobre Allende había logrado que la viga maestra del programa de la Unidad Popular (el traspaso de todos los monopolios en manos privadas chilenas o extranjeras) se redujera a una expresión mínima. En efecto, para realmente expropiar los monopolios, se necesitaba traspasar al Estado, de un total de poco más de 35.000 establecimientos industriales y de distribución en todo el país, una cantidad un poco superior a 266 empresas de carácter monopolístico. Allende prometió traspasar sólo 90 de ellas, dejando así en manos de la oligarquía y de los norteamericanos más del 50 % del capital monopolístico. Más todavía: de esas 90 empresas monopolísticas, sólo 53 iban a pasar a ser de dominio total del Estado, mientras las 37 restantes quedarían en la llamada «área mixta», en sociedad con esos mismos capitales monopolísticos en manos privadas yanquis y chilenas.

Además, Allende había accedido a expropiar dentro de la «Constitución y las leyes» con lo cual el costo de la formación del área de propiedad social era gigantesco, traspasando a manos de los «expropiados» enormes cantidades de capital que les permitía seguir manteniendo un sustancial poder económico y de maniobra. Ya para agosto de 1971, las cifras eran elocuentes: un total comprometido de 10.946 millones de escudos (890 millones de dólares) para ese año. El detalle era el siguiente:

Compra de acciones de bancos comerciales . . .	400 millones
Pago al contado por la expropiación de latifundios.	320 millones
Compra de empresas industriales monopolísticas . .	600 millones
Compra de tres bancos extranjeros	120 millones
Hierro, salitre y consorcios industriales yanquis .	576 millones
Indemniz. «indirecta» a Anaconda y Kennecott .	8.830 millones

Por supuesto, todo esto provocaba una debilidad potencial en el plan económico del Gobierno que, en agosto de 1971, tenía confiados a los oligarcas chilenos en poder manejar «la situación» y mantener a Allende dentro del «cambio reformista» para «evitar la revolución». Pero, para conseguir que este esquema caminara, era importante que Estados Unidos no apareciera como lo que realmente era: el enemigo principal del pueblo chileno. Era importante que no se asfixiara la economía

nacional, dependiente en lo principal del capital norteamericano, para permitir un «relativo nivel económico» que no alentar a los obreros, campesinos y empleados a «seguir adelante en el proceso de transformaciones». Pero el Pentágono no había sido capaz de convencer a los asesores económicos de Nixon de mantener una «actitud prudente y flexible con respecto a Allende», y eran la Anaconda y la Kennecott las que estaban manejando a Nixon.

En este momento del desarrollo de la lucha de clases en Chile, es cuando comienzan a surgir dudas en el seno de los altos mandos militares. Aun cuando hacía apenas dos meses que la enorme presión popular había obligado a la mayoría reaccionaria en el Parlamento a plegarse a la minoría de izquierdas y aprobar por unanimidad la nacionalización de las compañías norteamericanas que explotaban el cobre, el sentimiento de «antiimperialismo en la base» no había desaparecido; al revés, aumentaba con los días.

Un grupo de generales, principalmente en el Ejército, dirigidos por Oscar Bonilla (ex edecán del presidente Eduardo Frei y muy ligado políticamente al grupo de Frei en la Democracia Cristiana); Manuel Torres de la Cruz, ultracatólico y una especie de «padre» del actual fascismo chileno, jefe de la Quinta División en el extremo sur; Carlos Forrestier, jefe de la División Blindada del norte; Hernan Hiriart, jefe de la División de Caballería con asiento en Valdivia, al sur; Ervaldo Rodríguez Lasa, jefe de la Tercera División, con asiento en Concepción; Alfredo Canales Márquez y Ernesto Baeza Michelsen, amenazaron a expresar opiniones contrarias a la tesis de «esperar y ver» de los generales «reformistas».

A este grupo de generales se les llamó los «duros». Ellos decían que los «reformistas» estaban equivocados en su apreciación de poder manejar a Salvador Allende, porque éste iría donde «el populacho lo arrastrara». Agregaban que la tarea principal del Ejército y demás Fuerzas Armadas, era convencer al Pentágono de la necesidad de derrocar a Salvador Allende y «reinstaurar un Gobierno democrático como el de Eduardo Frei».

Manuel Torres de la Cruz, por ejemplo, explicaba que «Allende será incapaz de frenar los deseos de destrucción de los elementos marxistas» y hará todo lo posible por engañarnos y ganar tiempo para estar en situación de «virar el país como un calcetín». (Resulta grotesco este argumento de Manuel Torres

de la Cruz, si consideramos que aparecía como «general allendista», amigo personal» del Presidente de la República. y al mismo tiempo era el que más opinión formaba entre sus mandos para derrocar a Allende.)

Los «duros» decían que debía montarse un «esquema de acción» parecido al de septiembre-octubre de 1970, ya abortado por las razones que vimos en este mismo capítulo. El esquema era el de nombrar una Junta Militar transitoria, presidida por Torres de la Cruz, para que «en un plazo de seis meses» llamase a nuevas elecciones presidenciales, con «Eduardo Frei como candidato».

Durante la segunda mitad de 1971 y los primeros ocho meses de 1972, la influencia de la tesis de los «duros» no tuvo gran peso en el seno del Ejército, aun cuando contaba con las simpatías del entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, César Ruiz Danyau, y de los generales Gustavo Leigh, César Berdichewsky y Carlos Van Schowen, así como del jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso, vicealmirante José Toribio Merino, y sus colegas Pablo Weber y Horacio Justiniano (los tres en estrecho contacto con la US Navy). Justiniano, entre tanto, cumplía a cabalidad con su papel de «allendista», apareciendo ante Salvador Allende como «hombre progresista», «admirador de la Unión Soviética» y con una «lealtad a toda prueba».

Este grupo de los generales «duros» contaba con una característica que los generales «reformistas» no tenían: su estrecho contacto con figuras políticas como Eduardo Frei, de la Democracia Cristiana, y Patricio Phillips, Pedro Ibáñez y Francisco Bunes, del Partido Nacional.

Los constitucionalistas

El equilibrio y la marginación de la lucha política visible de las Fuerzas Armadas lo mantenían un grupo de generales encabezados por el propio comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats González. Sus figuras más conocidas estaban en el jefe de la Primera División, Joaquín Lagos Osorio; el jefe del Estado Mayor, general Augusto Pinochet Ugarte; el general Héctor Bravo Muñoz (que después sería enviado a la División de Caballería en reemplazo de Hernan Hiriart, cuando éste intentó una insurrección militar en marzo de 1972 y fue dado

de baja); y los generales Javier Palacios Ruhman y Carlos Araya.

Carlos Prats era el vocero de los «constitucionalistas», cuya línea general de conducta era «apoyemos a Allende para que él nos apoye a nosotros». «Consigamos con Allende transformar nuestras Fuerzas Armadas en una institución de preparación inmejorable, de una situación económica elevada y de una capacidad efectiva.» Carlos Prats planteaba la tesis de que «debemos trabajar para formar un Gobierno Allende-Fuerzas Armadas» que se base en la división de responsabilidades: Allende maneja a las masas de los trabajadores, y nosotros manejamos el país para que prospere. Tenemos que ayudar a Allende a golpear tanto a «los extremistas de derecha como a los de izquierda».

La tesis de Carlos Prats, hasta octubre de 1972, o más certeramente hasta marzo de 1973, fue la que tuvo mayor aceptación en los mandos altos, medios y bajos del Ejército y en los medios y bajos de la Fuerza Aérea y la Marina. En el cuerpo de Carabineros, el general director José María Sepúlveda Galindo era un adherente entusiasta a este modo de pensar.

Precisamente por su moderación, y porque permitía hacer el juego de «esperar y ver», los generales «reformistas» agrupados en la Academia de Guerra, y en estrecho contacto con el Pentágono, se mantuvieron como apoyo constante a Carlos Prats hasta que la situación de «estampida» de las organizaciones de obreros, campesinos y empleados (en 1973) pusieron en peligro todo el sistema, haciendo surgir la necesidad de no sólo derrocar a Allende, sino de destruir la democracia burguesa para reemplazarla por el fascismo.

En suma, el comandante en jefe del Ejército dirigía a un grupo de altos mandos para llegar a la meta de un Gobierno Allende-FF.AA., con la participación de la Democracia Cristiana y con la exclusión de los sectores «extremistas» de los partidos comunista y socialista. Éste era el grupo de los «constitucionalistas».

Otro grupo de generales, el de los «reformistas», tenía la meta de «prepararse lo suficiente» para estar en condiciones de gobernar al país y formar un Gobierno puramente militar o con Allende solo, sin los partidos de la Unidad Popular. Ambos grupos de generales pensaban que, en todo caso, al llegar al Gobierno, no podían destruir todo lo ya andado en el cambio de estructuras económicas, y se debía seguir con el desarrollo del capitalismo de Estado.

Un tercer grupo, el de los «duros», a quienes se les llamaba también fascistas, propiciaba el derrocamiento inmediato de Allende, la instauración de un Gobierno militar muy breve, de sólo seis meses, y la entrega posterior de la presidencia de la República a un político del estilo de Eduardo Frei.

Todo esto ocurría desde el 4 de septiembre de 1970 hasta noviembre-diciembre de 1972, donde el desarrollo de las ideas en el seno de los altos mandos tomó un camino más definido. Esto refleja cómo, en ningún momento durante su mandato, el presidente Allende contó con la llamada «lealtad» de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

1. El lector encontrará un relato del intento cinco en el primer capítulo de este libro. Del intento uno en el segundo capítulo. De las insurrecciones militares dos y tres en el tercer capítulo. Y de los intentos cuatro, cinco y seis en el quinto capítulo. De la insurrección militar número siete, la del 11 de septiembre, por supuesto, están los detalles en todo el libro, especialmente en el primero, cuarto, quinto y sexto capítulos.

2. Gran cantidad de documentación probatoria de las remuneraciones ilícitas recibidas por Gabriel González Videla de parte de los consorcios norteamericanos aparecieron en la revista chilena «Vistazo», de noviembre y diciembre de 1962 y julio de 1964; y en mis artículos *La penetración imperialista en Chile*, en «Causa ML» números 1 al 9 y *La historia sucia de los políticos demócratas*, en el diario «Puro Chile», del 15 de marzo al 7 de abril de 1973. Lo mismo ocurrió con el caso de Rodolfo Michels, lo cual fue tan escandaloso que, en 1964, fue expulsado del Partido Radical al ganar la directiva de esa agrupación política la corriente de izquierda que más tarde apoyaría la candidatura de Salvador Allende. La expulsión fue por «mantener relaciones ilícitas con la compañía extranjera Anaconda». Sin embargo, la corriente de derecha del partido radical recuperó un año más tarde la dirección, y las relaciones con la Anaconda se reiniciaron.

3. Cuando en julio de 1971 se nacionalizaron las minas de cobre en Chile, Robert Haldeman huyó del país precipitadamente (estaba acusado de fraude tributario). En sus oficinas de Santiago de las minas de El Teniente, se encontraron documentos que probaban conversaciones, sobornos, acuerdos contra la propiedad estatal y «compras» de votación en el Parlamento chileno. Eran unas 70.000 carillas de documentos. La revista «Mayoría», de diciembre 1971 a enero de 1972, publicó copias de 100 de esos documentos, que reproducían las conversaciones de Frei con Haldeman en 1973, el informe de Haldeman a su Gobierno sobre Frei y documentos de sobornos a periodistas, parlamentarios y políticos por hacer propaganda a favor de las compañías norteamericanas en su trato tributario en Chile. El senador derechista Raúl Morales Adriazola fue enjuiciado por esto; pero la Corte de Apelaciones, aunque estableció que la documentación era verdadera, se declaró incompetente para juzgar a Morales Adriazola porque tenía fuero parlamentario... ¡y se negó a pedir el desafuero del senador para juzgarlo! Los periodistas sobornados eran en su mayoría demócratacristianos, encabezados por Carlos Sepúlveda, actual presidente del Colegio profesional chileno. Respecto a Guillermo Correa Fuenzalida, ver mayores detalles en *La Historia yanqui de un Presidente chileno*, serie publicada en «Puro Chile», desde el 17 al 28 de febrero de 1973.

4. La denuncia concreta, procedente de EE.UU. sobre el fondo de 20 millones de dólares para financiar la campaña presidencial de Eduardo Frei en 1964, vino en el diario «The Washington Post» del día 6 de abril de 1973. Al citar un testigo, el diario dice que afirmó: «La intervención del Gobierno de los EE.UU. fue escandalosa y casi obscena.» Relató cómo 100 hombres de la CIA entraron en Chile para poner en práctica la campaña financiada por los 20 millones de dólares. Los partidos políticos de Izquierda PS y MAPU, después de esta noticia, recopilaron la publicación *La historia yanqui de un Presidente de Chile*, sobre las relaciones entre Frei y los consorcios norteamericanos, la revista «Causa ML», número 5, en que se

denunciaba lo mismo, y la publicación «punto Final» del 8 de junio de 1973, *Acta de acusación contra Eduardo Frei*, para presentar una acusación constitucional contra el senador Frei, en el Parlamento chileno, por «prestar servicios a una potencia extranjera durante su gestión presidencial». La acusación, por supuesto, fue rechazada por la mayoría senatorial reaccionaria, pero los cargos eran tan verdaderos y documentados, que Eduardo Frei no pudo querellarse contra esas publicaciones. Las denuncias, además, contenían facsímiles de las cartas enviadas por David Rockefeller a Frei, y sus «instrucciones económicas» (publicadas previamente en revista «Mayoría», enero de 1972) junto a la designación de Raúl Sáez. He aquí algunos párrafos: «...entrevista del 12 de noviembre de 1963, entre Robert Haldeman, vicepresidente de la Braden, y Frei en la casa de José Claro Vial (yerno de Gabriel González Videla) a petición de Frei. Dijo Frei: "Estoy seguro que si yo soy presidente, no habrá problema en REBAJAR los altos impuestos actuales —ya sea por convenio, ley o contrato ley— ...Aquí, en Chile, me siento más cerca de Braden que de la Anaconda... El señor Milliekn (de la Kennecott) es un hombre duro y seco. No pongo en duda su gran inteligencia, pero no tiene el calor humano y cordialidad que tenía mister Roy Glover (jefe mundial de la Anaconda), con quien hice muy buena amistad Y SIEMPRE ME AGRADECÍO por haber votado a favor de la Ley de Nuevo Trato." Texto según versión del *memorándum* del funcionario de la Kennecott Manuel Illanes (periodista chileno), encontrado en las oficinas de El Teniente, en Santiago, después de la nacionalización.» Otra cita: «En agosto de 1968, la publicación de EE.UU. llamada "Hansons's Latinamerican Letter" afirmaba, en su estudio sobre el Gobierno de Frei: "Ningún Gobierno de extrema derecha había tratado a las empresas norteamericanas con la generosidad con que lo hizo éste con los acuerdos que firmó. Su tratamiento excesivamente favorecedor, fue tan falto de equilibrio y de juicio y tan perjudicial para los intereses de Chile, que casi provocó hilaridad en Washington."»

5. La relación entre el Plan Camelot (para un detalle de él ver *Espionaje en América Latina*, de Gregorio Selser) y la investigación de Roy Hansen, quedó demostrada en las sesiones de la Cámara de Diputados de Chile, de junio a diciembre de 1965, convocadas por las revelaciones que sobre ese proyecto de espionaje hicieron los diarios "El Siglo", mayo, junio y julio de 1965; el reportero. Miroslav Popic y yo mismo, en Radio Portales de Santiago, en el programa dominical periodístico La Gran Encuesta, de junio y julio de ese mismo año. Como se demostró en las declaraciones de Juan de Dios Carmona, ministro de Defensa de Eduardo Frei en la época del escándalo, a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, el Ministerio de Defensa tenía conocimiento de la investigación de Hansen y la autorizó «porque no la consideró espionaje». El propio investigador Hansen escribe en su memoria que «los datos fueron recogidos durante una serie de tres viajes (totalizando quince semanas) a Chile entre 1964 y 1965. Se entrevistó a doscientos civiles chilenos, hubo entrevistas intensivas con treinta y ocho generales y se distribuyó un cuestionario a oficiales activos de la Academia de Guerra y la Escuela Politécnica». Agrega que sus viajes fueron entre diciembre de 1964 y junio de 1965, y que tuvo acceso a documentación de la Biblioteca del Estado Mayor del Ejército de Chile. Por su parte, la introducción del Plan Camelot en Chile estuvo a cargo del sociólogo Hugo Nuttini, quien también comenzó por conectarse con Alvaro y Ximena Bunster, para iniciar los contactos con el fin de formar un equipo de trabajo. Pero una denuncia del sociólogo noruego Johan Galtung puso en alerta a los periodistas de izquierda y vino el escándalo a partir de mayo de 1965. Para un detalle de estos sucesos, ver mi libro *¿Golpe de Estado contra Frei?*

6. En agosto de 1968, en el número 2 de la revista «Causa ML», en mi artículo *La penetración norteamericana en las Fuerzas Armadas Chilenas*, hice las primeras denuncias documentadas sobre la introducción de cursos antimarxistas en la Escuela Bernardo O'Higgins. También las hizo la revista «Punto Final», en 1969 y 1970. Por otro lado, a partir de la violenta campaña presidencial de 1964, la expresión «occidental y cristiano», comenzó a ser usada por los derechistas como oposición al «mundo oriental y ateo», definiendo la lucha del capitalismo contra el comunismo. A partir de entonces, la expresión mundo «occidental y cristiano» pasó

a tener el significado de mundo «no socialista», perdiendo la connotación religiosa de la expresión «cristiano». Discursos, libros y tesis docentes de la derecha y las Fuerzas Armadas traen esa expresión desde aquella época. La inauguración de los viajes del último curso de la Escuela Militar a la Zona del Canal, en 1968, se hizo en forma pública, con un discurso alusivo del entonces director de esa escuela, René Schneider Chereau. Respecto a la orientación global anticomunista de la enseñanza militar chilena, ver *Las FF.AA. de Chile en la vida nacional*, del teniente coronel Alberto Polloni.

7. Para un examen detallado de las reuniones conspirativas de los personajes políticos civiles y militares en la conspiración de octubre de 1970, ver *El Caso Schneider. Operación Alfa; Chile al rojo*, de Eduardo Labarca; *Chile: ¿una economía de transición?*, de Sergio Ramos; colección del diario «Puro Chile», de noviembre de 1970; y reproducción del informe del fiscal del proceso, en el diario «El Siglo» de 5 de junio de 1971. Para la participación del general Schneider en el complot, denunciándolo de manera lateral, porque las condiciones políticas del momento no permitían destruir la imagen constitucionalista de Schneider, ver la revista «Causa ML», número 20, de enero-febrero de 1971, y el diario «El Pueblo», de febrero, marzo y abril de 1971 (en estas crónicas se denunciaba también la intromisión del Pentágono en el asunto). Como documento anexo al hecho de las maquinaciones de la ITT y la CIA, ver *Documentos Secretos de la ITT*. La validez de las denuncias se prueba por el hecho de que nunca los afectados pudieron querellarse contra los autores de los reportajes y libros, aun cuando intentaron hacerlo.

8. La prueba más espectacular de la participación de Eduardo Frei en el complot fue dada por el propio general en retiro Roberto Viaux Marambio al confesárselo, en la cárcel, a la periodista Florencia Varas, la cual lo publicó en el libro *Conversaciones con Viaux*. De acuerdo a lo allí establecido, y en investigaciones posteriores al escándalo provocado por esta confesión (ése fue uno de los cargos principales para la acusación contra Eduardo Frei en el Parlamento chileno en 1973, cuando ese político era presidente del Senado), se descubrió que los magnates Arturo Matte Larraín (del clan económico Matte-Alessandri) y Guillermo Carey Tagle, abogado de la Kennecott Copper, eran los contactos entre Frei y el resto de los conspiradores, incluyendo a los norteamericanos. Viaux explicó a la periodista Varas detalladamente cómo Frei participó en la conspiración, pero pidió no ser asociado a ella públicamente. El general en retiro afirmó que parece que las vacilaciones de Frei llevaron a los norteamericanos a retirar repentinamente su apoyo al golpe.

9. Resulta trágico recordar ahora que Allende siempre insistió en su tesis de que su gobierno no era socialista, sino que preparaba las condiciones para caminar hacia el socialismo sin violencia y sin destrucción previas. Basándose en esa tesis, durante los tres años de su Gobierno trató de convencer a sus enemigos políticos de que si no se hacían las reformas del programa de la Unidad Popular, la violencia social estallaría irremediablemente, motorizada por los sectores más desposeídos. Sin embargo, la cortina publicitaria de la derecha y de los Estados Unidos cubrió este verdadero pensamiento de Allende, y transformó a su Gobierno en «socialista», e incluso en «marxista», sin dar ninguna prueba de ello más que la reiteración publicitaria. Los discursos y entrevistas de prensa de Allende están repletos de referencias a su programa no socialista y a su tesis de que sus reformas eran la única forma de impedir el desmoronamiento del sistema social en que Chile vivía. Citemos sólo tres ejemplos.

Discurso de Allende el día primero de mayo de 1972, ante centenares de miles de trabajadores: «En primer lugar, claridad, entender bien, saber a dónde vamos, qué meta debemos alcanzar en esta etapa. Yo he dicho honestamente: el Gobierno que presido no es un Gobierno socialista. El Programa de la Unidad Popular no es un programa socialista. Pero el Gobierno y el Programa inician la construcción socialista». (Citado de Salvador ALLENDE, *La Revolución Chilena*. Ediciones Eudeba, Buenos Aires, 1973, p. 146.)

«Nuestra resuelta ejecución de medidas revolucionarias incide sobre las causas de las tensiones sociales y hace posible, por ende, el orden público. En el

Chile de hoy, la revolución social es garantía para el mantenimiento del orden público». (Citado del *Segundo Mensaje al Congreso Nacional*, 21 de mayo de 1972, publicado por la Editorial de Prisiones con esa misma fecha.)

«No nos pongan obstáculos. Lo peor sería que fracasáramos no porque seamos incapaces, sino porque se pongan obstáculos artificiales en nuestro camino. Si eso sucediera, al pueblo latinoamericano no le quedaría otra alternativa que la violencia. Si eso sucediera, llegaría el día en que ningún norteamericano pueda poner los pies en Sudamérica sin correr peligro». (Citado de una entrevista a Allende en la revista norteamericana «TIME», del 19 de abril de 1971.)

El lector encontrará más citas de Allende respecto a esto mismo en el capítulo quinto de este libro. Respecto al carácter «capitalista de Estado», de las reformas económicas del Programa de la Unidad Popular, ver *Chile, ¿una economía de transición?*, ya citado; y *Dos Años de política económica*, de Pedro Vuskovic (ministro de Economía de Allende), publicado en revista «UTE», números 11 y 12, enero-febrero de 1973. Una versión de la conversación de Allende con los generales fue dada por Luis Hernández Parker, en la audición Tribuna Política, 20 de octubre de 1970, en Radio Portales de Santiago.

10. Una versión de la charla dada por el general Schneider en la Academia fue conocida en la noche del día 15 de octubre en el seno del Comando de la Candidatura del senador Salvador Allende, lo que provocó una serie de artículos sobre el tema «constitucionalidad de las Fuerzas Armadas», los días 17, 18 y 19 de octubre de 1970 en los diarios «Última Hora», «El Siglo» y «Puro Chile», reiterando algunos de los conceptos vertidos por Schneider para demostrar que Allende sería elegido en el Congreso Pleno porque las Fuerzas Armadas no le tenían miedo al Programa de la Unidad Popular. Por su parte, el abogado Guillermo Carey Tagle (de la Kennecott) y el general de aviación Joaquín García, mezclados en el complot (ver *Chile al Rojo*, ya citado), comentaron en una reunión de amigos (en casa del senador Raúl Morales Adriazola), la noche del 18 de octubre, la charla de Schneider. Allí surgió por primera vez el nombre del coronel Thomas H. Jones, jefe de la Sección Ejército de la Misión Militar de Estados Unidos en Chile, como el «causante» de la charla de Schneider que echaba por tierra las esperanzas de victoria en el complot montado por los generales conspiradores de septiembre-octubre de 1970. Jones había llegado a mediados de 1968 a Chile, y había sido constante acompañante de Schneider en las programaciones docentes de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins. La revista «PEC», de la última semana de octubre de 1970, por su parte, denunció concretamente a los «militares norteamericanos» como los causantes de la asunción a la Presidencia de Salvador Allende («PEC» era una revista de ultraderecha). Informaciones posteriores mostraron que el coronel Jones, junto con el agregado militar a la Embajada de los Estados Unidos, coronel Paul M. Wimert, habían estado estrechamente ligados a Schneider en esas semanas, manteniendo reuniones con otros mandos militares del Ejército y la Fuerza Aérea, principalmente, para explicarles la falta de oportunidad de impedir que Allende fuera Presidente. Con una escasa diferencia de tres días, los coroneles Jones y Wimert, fueron sacados de la Embajada de Estados Unidos en julio de 1971. Esto ocurrió después que desde el 14 de enero hasta el 25 de mayo de 1971, en un desusado ritmo de visitas, un almirante y un contralmirante de la Marina de EE.UU., un general de Ejército de los EE.UU. y un general del Aire del mismo país, visitaron los altos mandos militares chilenos, un promedio de cuatro días cada uno, al mismo tiempo que, entre diciembre y mayo de 1971, Allende se reunía catorce veces con los altos mandos militares chilenos en reuniones que el propio Allende calificó a los reporteros de diarios y radios como destinadas «a tratar del futuro de esas instituciones nacionales».

11. En noviembre de 1970, en las primeras instrucciones para los jefes de periódicos y medios informativos de la Unidad Popular, el presidente Allende les dijo (de lo cual el autor de este libro es testigo directo) que «el trágico suceso del crimen contra el general Schneider es de una delicadeza política tal, que nuestra responsabilidad política, de revolucionarios, es tratarlo como

mejor convenga a los intereses del proceso que encabezamos». Y en seguida planteó a los responsables periodísticos que debían atenerse a las informaciones oficiales del fiscal militar encargado del proceso, en referencia a todo lo que tuviera que ver con personal uniformado supuestamente involucrado. Instrucciones posteriores más detalladas de los funcionarios subalternos de la Presidencia, añadieron que el suceso debía enfocarse como «aventura personal y aislada» de algunos generales. Allende había insistido, ante los periodistas responsables de la Unidad Popular que había que cuidar que las Fuerzas Armadas no se quebraran porque así su Gobierno conseguiría una mayor tranquilidad con respecto «a ese flanco» (éstas fueron sus palabras textuales). En verdad, el momento era muy peligroso porque estaban involucradas las guarniciones de Santiago y de Concepción, y los comandantes en jefe de la Marina, la Aviación y Carabineros. Es notable el hecho de que el comandante en jefe de la Tercera División, en esa época, fuera el general Eduardo Arriagada Lasa (que tenía como su jefe de Estado Mayor al coronel Washington Carrasco. Este coronel, más tarde general, sería nombrado en la Tercera División como reemplazante de Arriagada Lasa durante la Administración Allende... ¡y se convertiría en uno de los principales integrantes de generales conspiradores encabezando la insurrección militar del 11 de septiembre de 1973! En diciembre de 1971, el diario «La Tribuna», de Santiago, mencionó el acuerdo Prats-Allende, en comentarios sin firma.